

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2021

CASO No. 2622-17-EP

**EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE**

SENTENCIA

Tema: Esta sentencia analiza las decisiones de primera y segunda instancia de una acción de hábeas corpus cuyo objeto fue buscar que se garantice la atención médica del accionante y se repare la violación a su derecho a la integridad física producto de un disparo en su espalda en el marco de un motín de personas privadas de la libertad. Una vez realizado el análisis constitucional respectivo, se declara la vulneración a los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, en la sentencia de primera instancia, y al debido proceso en la garantía de motivación en las dos decisiones. Asimismo, se analiza el mérito del caso en relación a una privación de la libertad ilegal y arbitraria y los derechos a la integridad física y a la salud.

Tabla de contenidos

I. Antecedentes procesales	2
1.1. Hechos que dieron origen al hábeas corpus	2
1.2. Sobre la tramitación del hábeas corpus.....	3
1.2.1. Sobre la ejecución de la sentencia a cargo del Tribunal de Garantías Penales	4
1.3. Acción extraordinaria de protección	4
II. Competencia.....	5
III. Alegaciones de las partes	6
3.1. Pretensión y fundamentos de la acción.....	6
3.2. Fundamentos del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi	7
3.3. Fundamentos de la Sala Provincial	7
IV. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional	8
4.1. Sobre el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable	8
4.2. Sobre la garantía de motivación.....	10
4.2.1. Sentencia dictada por el Tribunal de Garantías (primera instancia).....	10
4.2.2. Sentencia dictada por la Sala Provincial (sentencia de apelación)	14
V. Análisis de mérito	17
5.1. Verificación de procedencia del análisis de mérito.....	17
5.2. Resolución de problemas jurídicos	18
5.2.1. Sobre la supuesta privación de la libertad ilegal, arbitraria e ilegítima al ser ubicado en un pabellón de máxima seguridad sin una sentencia penal ejecutoriada	19
5.2.2. Sobre la supuesta violación del derecho a la integridad personal	21
5.2.3. Sobre la presunta afectación al derecho a la salud	27

5.2.4. Sobre el derecho a una vida digna	34
5.3. Sobre la Reparación integral	34
VI. Decisión	37

I. Antecedentes procesales

1.1. Hechos que dieron origen al hábeas corpus

1. El 26 de agosto de 2015, Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez¹ (**accionante**), fue trasladado al pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (**CRSC**)² con la finalidad de que cumpla con una medida personal de prisión preventiva.
2. El 10 de septiembre de 2015, se suscitó un amotinamiento de las personas privadas de libertad (**PPL**) en el pabellón de máxima seguridad del CRSC³. Así, un grupo de agentes penitenciarios ingresaron al pabellón de máxima seguridad y sacaron al accionante de su celda (**C1-C**)⁴.
3. Entre los intentos de controlar el amotinamiento el accionante refiere que “*cuando estaba sometido en el suelo un agente lo dispara con un cartucho de perdigones en la parte baja posterior de su espalda, disparo que le produce una herida de la cual empieza a salir abundante sangre*”⁵. Al constatar la herida generada, el accionante fue trasladado al Policlínico del CRSC, donde le extrajeron ocho perdigones de su espalda, y fue devuelto a su celda⁶. Posteriormente, afirma que fue atendido por cuarenta y seis días con un tratamiento que consistía en aplicarle una “*pomada*”, antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios para curar su herida⁷. Luego de ello, no habría recibido atención médica por más de dos años.

¹ El señor Imbaquingo Sánchez fue privado de la libertad desde el 26 de agosto de 2015, con una medida de prisión preventiva según consta a fs. 17 del expediente del hábeas corpus. Posteriormente, fue sentenciado a una pena de nueve años en régimen cerrado por el delito de secuestro. (Proceso judicial No. 17721-2016-0827). El 14 de septiembre de 2016, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia inadmitió el recurso de casación interpuesto por el accionante.

² Consta a fs. 16 del expediente de instancia el Informe No. 078-CRS-SCN-2015-S suscrito por el Supervisor del Centro de Rehabilitación Social- Regional Sierra Norte de la Latacunga (CRS-RSCN de la Latacunga) en el que se indica que el accionante estuvo privado de la libertad en el Pabellón de Máxima Seguridad desde el 26 de agosto de 2015.

³ Consta a fs. 1 y fs. 67 del expediente de primera instancia el relato del accionante en torno a las razones por las que presentó el hábeas corpus. Esta información es notoria y pública: El Universo, “Terminó amotinamiento en cárcel de Latacunga”, *El Universo*, 10 de septiembre de 2015, <https://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/10/nota/5116142/amotinamiento-carcel-cotopaxi-lleva-casi-4-horas/> [consultado el 05 de junio de 2021].

⁴ Consta a fs. 17 del expediente de instancia.

⁵ Consta a fs. 17 del expediente de instancia.

⁶ Consta a fs. 17 del expediente de instancia.

⁷ Consta a fs. 17 del expediente de instancia.

1.2. Sobre la tramitación del hábeas corpus

4. El 22 de junio de 2017, el accionante presentó acción de hábeas corpus en contra del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos⁸, del director del CRSC y la Procuraduría General del Estado.
5. El 30 de junio de 2017, el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi (**Tribunal de Garantías**) resolvió: **(a)** aceptar parcialmente la acción de hábeas corpus; **(b)** declarar vulnerados los derechos constitucionales a la salud y a la atención prioritaria de los derechos de las personas privadas de la libertad⁹; y, **(c)** como medida de reparación ordenó que el accionante “ (...) *sea ingresado bajo resguardo policial al Hospital General Provincial de Latacunga, a fin de que sea evaluado, tratado y rehabilitado de manera integral en su salud por el tiempo que el o los facultativos así lo consideren, una vez dado de alta deberá ser remitido nuevamente al [CRSC]*”¹⁰. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación¹¹.
6. El 31 de julio de 2017, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Cotopaxi (**Sala Provincial**) resolvió rechazar el recurso de apelación, dispuso medidas adicionales de reparación y confirmó la sentencia subida en grado¹².

⁸ Actualmente las competencias de este organismo en cuanto a la rectoría del sistema de rehabilitación social están a cargo del Servicio Nacional de Adultos Privados de la Libertad.

⁹ El Tribunal concluyó que el accionante “*no recibió atención médica oportuna y especializada por parte del Accionado*”

¹⁰ Consta a fs. 67 a 70. Respecto a las pretensiones de traslado a otro centro, disculpas públicas y reparación integral, estas fueron rechazadas “*en virtud de que esta sentencia constituye en sí una forma de reparación; y, el traslado del accionante al centro de detención conocido como la cárcel No. 4 de la ciudad de Quito, por cuanto la competencia para los traslados de los privados de la libertad corresponde a un juez de garantías penitenciarias*”.

¹¹ En lo medular, el accionante indicó que no se consideraron sus alegatos en cuanto a: (i) que estaba en una celda de máxima seguridad aun cuando era una persona en prisión preventiva; (ii) que los tratos en su contra fueron tortura más no tratos crueles inhumanos y degradantes porque se le privó del derecho a la salud (iii) y que, al haberse afectado su integridad física, correspondía su traslado a otro pabellón o centro de privación de la libertad con el objetivo de evitar eventuales represalias en su contra.

¹² Como medidas de reparación la Sala Provincial ordenó que: (a) el CRSC, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, “*velen por la salud del legitimado activo, debiendo en un plazo de treinta días contar con el diagnóstico médico especializado según el pre diagnóstico de lumbalgia (CIE: 10: M545)*”; (b) el director del CRSC, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, aseguren la atención médica oportuna que permitan la rehabilitación física del accionante; (c) por la dificultad de movilidad la comida le sea entregada en su celda hasta que el médico especialista determine si dicha medida es favorable o contraria para la rehabilitación del accionante; (d) como mecanismo de prevención respecto a que se puedan encontrar en el CRSC privados de la libertad sin sentencia ejecutoriada, el Tribunal a quo solicite al Consejo de la Judicatura difundir entre los operadores de justicia, que en sus resoluciones se determine correctamente el tipo de Centro de Privación de la libertad al que se le destina al privado de la libertad; y, (e) que el Tribunal de instancia haga el seguimiento y disponga las medidas adicionales que se requieran para dar estricto cumplimiento de esta sentencia.

1.2.1. Sobre la ejecución de la sentencia a cargo del Tribunal de Garantías Penales

7. El 23 de noviembre de 2018, el accionante, frente a una descompensación grave en su salud,¹³ solicitó que: **(a)** se informe si las entidades accionadas dieron o no cumplimiento a las disposiciones dictadas en las sentencias emitidas en el marco del hábeas corpus¹⁴ y **(b)** se modifiquen las medidas de reparación a fin de tutelar la salud del accionante¹⁵.
8. El 14 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas de reparación. El 07 de enero de 2019, el Tribunal dictó un auto en el que concluyó que el accionante no recibió atención médica integral ni condiciones dignas para el cumplimiento de su condena¹⁶.
9. El 14 de enero de 2019, la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga¹⁷ resolvió imponer medidas alternativas a la privación de la libertad a favor del accionante por el tiempo que reste para que cumpla su pena privativa de libertad¹⁸.

1.3. Acción extraordinaria de protección

10. El 29 de agosto de 2017, el accionante, por medio de su defensor público presentó acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones de primera y segunda instancia.

¹³ Precisó que el accionante había adquirido una discapacidad física del 71% a consecuencia del cuadro de monoplegia en los miembros inferiores. Consta a fs. 24 a 27 del expediente constitucional.

¹⁴ Consta a fs. 24 a 27 del expediente constitucional.

¹⁵ De conformidad con el artículo 21 de la LOGJCC: “La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional”.

¹⁶ En particular señaló que “al punto que a su ingreso y [al] encontrarse cumpliendo una medida cautelar, fue ubicado en un pabellón de máxima seguridad (...) pese a encontrarse confinado en una silla de ruedas, se lo mantiene en una celda al igual que los demás reclusos, sin consideración alguna a su estado de discapacidad física y su imposibilidad de movilidad”. Por tal razón, ordenó: (i) remitir el proceso a la Sala de Sorteos del Complejo Judicial a fin de que avoque conocimiento uno de los jueces con competencia en garantías penitenciarias y disponga las medidas alternativas a la privación de la libertad a favor del accionante, por el tiempo que resta para que cumpla su pena, (ii) que luego de cumplido con la anterior disposición, los accionados “ejecutarán un plan integral de atención médica y psicológica en su favor, para lo cual dispondrán del elemento humano (sic) y logístico necesario, sea para trasladarlo al centro hospitalario o para que sea atendido en su domicilio ubicado en el sector de Conocoto, Puente 6, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, lo cual se complementará con el suministro necesario y suficiente de medicamentos y terapias para su rehabilitación” (sic) y (iii) que la Defensoría del Pueblo efectúe un seguimiento del cumplimiento de las medidas ordenadas en la providencia.

¹⁷ El proceso fue signado con el No. 05283-2019-00020G.

¹⁸ Las medidas ordenadas fueron las siguientes: **(a)** la prohibición de salida del país del accionante, **(b)** la obligación de presentación periódica una vez por mes ante el juzgador de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Rumiñahui y **(c)** una vez que los dispositivos de vigilancia electrónica ya se encuentren nuevamente disponibles, aplicables y en funcionamiento mientras se cumple con las medidas alternativas a la privación de la libertad, ahora concedido, se ordena la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica con el tipo de monitoreo de libre circulación.

11. El 08 de enero de 2018, el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción. Por sorteo efectuado el 07 de febrero de 2018, la sustanciación de la causa correspondió a la ex jueza constitucional Pamela Martínez Loayza¹⁹.
12. Una vez posesionados los actuales jueces y juezas de la Corte Constitucional se sorteó la causa el 12 de noviembre de 2019 y correspondió su sustanciación a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo.
13. El 18 de noviembre de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el tratamiento prioritario del caso²⁰.
14. El 25 de noviembre de 2020, la jueza constitucional sustanciadora avocó conocimiento de la causa, solicitó informe a los jueces del Tribunal de Garantías Penales y a los jueces de la Sala Provincial y convocó a una audiencia pública telemática que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2020.
15. A la audiencia telemática celebrada el 10 de diciembre de 2020 comparecieron únicamente el accionante y su abogado patrocinador.
16. En providencia expedida el 15 de enero de 2021, la jueza constitucional, para mejor resolver, solicitó: **(a)** al Ministerio de Salud Pública (**MSP**) la remisión de un informe debidamente documentado respecto del “*a) historial médico en el que se indique el diagnóstico actual del accionante, b) el tratamiento médico que le haya proporcionado, c) las medicinas suministradas, y, d) un detalle de las visitas médicas y psicológicas realizadas al accionante y/o miembros de su entorno familiar*” y **(b)** a la Defensoría del Pueblo la presentación de un informe detallado respecto de la situación actual de cumplimiento de las medidas de reparación.

II. Competencia

17. La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República (**CRE**); en concordancia con los artículos 63 y 191 (2),

¹⁹ El 07 de junio de 2018, la jueza constitucional sustanciadora de ese entonces avocó conocimiento de la causa, convocó a audiencia pública y solicitó informes de descargo a los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y a los jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. El 25 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública a la que comparecieron: **(a)** el abogado Paúl Fernando Flores Pazmiño, defensor público, en representación del legitimado activo Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez; **(b)** la abogada María Belén Peñaherrera Jaramillo y la licenciada Sonia Alexandra Parra Agreda, en representación del director del CRSC; y **(c)** el doctor Arturo Vinicio Romero Guachamin, en representación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

²⁰ La priorización se sustentó en que el accionante era en ese entonces una persona privada de libertad y es persona con discapacidad física del 71%.

literal d) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

III. Alegaciones de las partes

3.1. Pretensión y fundamentos de la acción

18. En su demanda, el accionante identifica que las decisiones impugnadas vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de motivación (art. 76. 7 literal l) CRE) y a la tutela judicial efectiva en el elemento a ser juzgado dentro de un plazo razonable (art. 75 CRE).
19. En primer lugar, respecto de la sentencia dictada por el Tribunal, señala que solo se analizó la supuesta vulneración del derecho a la salud por falta de atención médica de parte del CRSC. En tal sentido, a su decir, no se habrían analizado los siguientes hechos: (a) la reclusión en un pabellón de máxima seguridad sin contar con sentencia condenatoria ejecutoriada y estar solo con una medida cautelar de prisión preventiva; (b) la falta de determinación de los responsables de sus lesiones; (c) la falta de reubicación en otro centro de privación de la libertad; (d) la falta de referencia al uso de armas de fuego por parte de los agentes de Policía al momento de realizar el operativo; y, (e) la perpetración de tratos inhumanos, crueles y degradantes.
20. Manifiesta que, a pesar de verificarse una violación a derechos constitucionales, no se le concedió el traslado a un centro de detención provisional, bajo la consideración de que la competencia para los traslados de los privados de la libertad corresponde a un juez de garantías penitenciarias y no a los que tramitan hábeas corpus.
21. Arguye que la sentencia dictada por la Sala Penal configuró una violación al derecho a la tutela judicial efectiva puesto que, a su decir, se desconocieron las reglas constitucionales de tramitación del hábeas corpus debido a que se ingresó la acción el 22 de junio de 2017, se avocó conocimiento el 23 de junio de 2017 y la audiencia fue celebrada el 27 de junio de 2017 -5 días después de que se presentó la acción-.
22. Aduce también que los jueces accionados de ambas instancias tenían la obligación de pronunciarse respecto de los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por ambas partes, lo que no sucedió en el presente caso. Así también, señala que la sentencia de segunda instancia, al referirse al cargo de separación de personas privadas de la libertad por categorías *“hace mención a normas y sentencias que es de conocimiento sin motivar que es lo que se puede precisar de estas y que es lo que ha podido recabar la Sala con el fin de resolver ante lo pedido, es decir carece de razonabilidad y comprensión, tan solo se enuncian normas y sentencias no existe un análisis de estas con los hechos narrados y probados en el proceso”*.
23. Por último, solicita que se acepte la acción extraordinaria de protección, se declare la vulneración de los derechos alegados y, como medida de reparación, se deje sin efecto las sentencias impugnadas y se resuelva el mérito de la acción de hábeas corpus.

3.2. Fundamentos del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi

24. El 22 de junio de 2018, los magistrados del Tribunal de Garantías, Diego Xavier Mogro Muñoz y Segundo Elías Novillo Rivero presentaron su informe de descargo en el que reportaron que: (i) al haberse expedido la sentencia el 30 de junio de 2017 no era posible aplicar los criterios del caso No. 17-18-SEP-CC y que (ii) resolvieron todos los puntos de la demanda.
25. En un nuevo informe ingresado el 08 de diciembre de 2020, refieren que dejaron de ser integrantes del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y que al momento no cuentan con el expediente físico para recordar cuál fue la petición inicial del accionante. Asimismo, señalan que al constatar el estado de salud del accionante dispusieron que un juez de garantías penitenciarias disponga las medidas alternativas a la privación de la libertad y que, durante su permanencia en el CRSC se dispuso su atención bajo resguardo policial.

3.3. Fundamentos de la Sala Provincial

26. El 25 de junio de 2018, las juezas Ruth Amelia Yazán Montenegro y Ana Lucía Merchán Larrea presentaron informe de descargo. En particular, aducen que la decisión en examen está motivada debido a que incluye *“las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, enuncia las normas constitucionales y legales y principios jurídicos en los que se fundó la decisión, se ha justificado la pertinencia de su aplicación a los hechos relatados y probados, pronunciándonos sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por las partes y hemos realizado el análisis de los hechos adecuando a las normas aplicables (...)”*.
27. Manifiestan que la sentencia cumplió con el objeto del hábeas corpus, *“esto es asegurar el goce y disfrute del derecho a la salud y resguardo de integridad física, se ratificó la inmediata atención médica especializada del accionante y dispuso medidas adicionales de reparación (sic)”*.
28. En un segundo informe presentado el 7 de diciembre de 2020, la jueza Ana Lucía Merchán Larrea señala que el pedido de traslado a otro centro de rehabilitación social es improcedente dado que no se justificaron las presuntas amenazas quedando en una mera solicitud sin sustento, más aún por el tiempo que transcurrió entre el amotinamiento y la presentación del hábeas corpus.
29. En cuanto a la petición de instalación de un brazalete electrónico expresó que *“no se encontraba que el accionante tenga una enfermedad catastrófica que amerite una decisión de esa naturaleza”*.
30. Por último, en relación con el cargo referente a que el accionante fue privado de la libertad en un pabellón de máxima seguridad aun cuando tenía una orden de prisión

preventiva, observó que “*está alegación se presenta en la audiencia, pero no consta en el escrito de acción limitando el derecho a la defensa de los accionados*”.

IV. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

31. En las acciones extraordinarias de protección los problemas jurídicos surgen, principalmente, de los cargos formulados por la parte accionante, es decir, de las acusaciones que esta dirige al acto procesal objeto de la acción por considerarlo lesivo de un derecho²¹. En el presente caso, conforme quedó expresado, el accionante alega vulneraciones a los derechos a la tutela judicial efectiva en la dimensión de ser juzgado dentro de un plazo razonable por parte del Tribunal de Garantías Penales y al debido proceso en la garantía de motivación por parte de las dos decisiones impugnadas.
32. Esta Corte ha reiterado que, por eficiencia y economía procesal, para evitar la reiteración argumental en los análisis y para dotar de un contenido específico claro a cada derecho, cuando se argumenta la violación de la tutela efectiva a partir de cualquiera de las garantías del debido proceso, el juez o jueza podrá direccionar el análisis a la garantía que corresponda del debido proceso y podrá tratar cada garantía de forma autónoma²².
33. El accionante argumenta una violación a ser juzgado dentro de un plazo razonable porque, a su decir, el Tribunal de Garantías Penales irrespetó los plazos para la tramitación del hábeas corpus. Este derecho, conforme a los fallos de esta Corte²³, puede ser analizado de dos formas: (a) como un elemento transversal de la tutela judicial efectiva o (b) como un derecho autónomo. Revisada la demanda, se desprende que en este caso las alegaciones abordan el plazo razonable como un derecho autónomo²⁴.
34. De modo que esta Corte examinará si la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías vulneró el derecho a ser juzgado dentro del plazo razonable. Así mismo, analizará la garantía de motivación tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia:

4.1. Sobre el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable

35. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es parte de las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva²⁵.
36. En particular, el artículo 7 (5) de la CADH establece que:

*“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y **tendrá derecho a ser***

²¹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1967-14-EP/20 de 13 de febrero de 2020, párr. 16.

²² Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 889-20-JP/21 de 10 de marzo de 2021, párr. 122.

²³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 889-20-JP/21 de 10 de marzo de 2021.

²⁴ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1553-16-EP/21 de 16 de junio de 2021, párr. 28.

²⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1562-14-EP/21 de 10 de marzo de 2021, párr. 39.

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (énfasis añadido)²⁶.

37. Esta Corte recuerda que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es transversal a todas las materias y a la sustanciación de todo tipo de acciones y recursos atendiendo a las características del caso concreto y a la naturaleza de la acción o recurso que se tramiten²⁷.
38. En el presente caso, el accionante activó una acción de hábeas corpus ante lo cual correspondía a los jueces del Tribunal de Garantías Penales observar que la tramitación de las garantías jurisdiccionales se rige, entre otros, por los principios de sencillez, eficacia y celeridad²⁸. Así, para la aplicación de estos principios, los jueces que sustancien garantías jurisdiccionales deben ceñirse *“a los plazos previstos para el efecto, a fin de que responda oportunamente frente a la vulneración de derechos. Por este motivo, no admite incidentes o formas de proceder que retarden el ágil despacho de la causa”*²⁹.
39. Cabe subrayar que para la acción de hábeas corpus, la misma Constitución de modo específico establece plazos para avocar conocimiento y convocar a audiencia pública. Así, corresponde a los jueces realizar la audiencia dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y posteriormente notificar la sentencia en las siguientes veinte y cuatro horas. Además, como ya ha señalado esta Magistratura en la tramitación de las garantías jurisdiccionales y particularmente en un habeas corpus *“están proscritos los incidentes y dilaciones innecesarias, lo cual obliga a todo juzgador o juzgadora a resolver con la inmediatez que el caso requiere y dentro de los tiempos establecidos”*³⁰.
40. El establecimiento de plazos expresos y expeditos en la tramitación de la garantía de hábeas corpus permite a los jueces y juezas ordenar las medidas y/o acciones que correspondan de forma oportuna, adecuada y eficaz para garantizar la protección directa de los derechos tutelados por esta garantía. Además, permite que se repare inmediatamente a los accionantes en caso de que las violaciones a sus derechos constitucionales se hayan consumado. Por tal razón, el derecho al plazo razonable en la garantía del hábeas corpus se garantiza en la medida en que se respeten los plazos establecidos en la Constitución y en la ley.³¹

²⁶ Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 (5)

²⁷ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1553-16-EP/21 de 16 de marzo de 2021, párr. 47. Véase también: Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, 24 de octubre de 2012.

²⁸ Esto de acuerdo con el artículo 86 (3) de la CRE.

²⁹ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1693-17-EP/20 de 2 de diciembre de 2019, párr. 31.

³⁰ Corte Constitucional. Sentencia No. 365-18-JH/21 de 24 de marzo de 2021, párr. 178.

³¹ En la sentencia N° 112-14-JH/21 de 20 de julio de 2021, respecto de personas/comunidades indígenas ha establecido una salvedad en relación con la obligación concreta de los jueces que conocen habeas corpus, determinando que: *“(…)si el Tribunal de hábeas corpus no cuenta con los suficientes elementos para ordenar la inmediata libertad o por la falta de comparecencia de las autoridades indígenas a la audiencia*

41. En el caso en cuestión, se desprende que el Tribunal de Garantías realizó las siguientes acciones tras la presentación de la demanda el 22 de junio de 2017: **(i)** avocó conocimiento de la causa el 23 de junio de 2017³², **(ii)** la audiencia pública se celebró el 27 de junio de 2017³³ y, **(iii)** se dictó sentencia el 30 de junio de 2017.
42. De la revisión del proceso, esta Corte observa que la judicatura accionada se demoró un total de ocho días para tramitar la causa. Así, se advierte que para convocar a audiencia pública existió una demora injustificada de 5 días y para dictar sentencia se demoró dos días más, lo cual sobrepasa el plazo constitucional previsto para el efecto. De este modo, se constata que el Tribunal de Garantías no actuó con la diligencia que se requiere para la sustanciación de una acción de hábeas corpus pues omitió el deber de resolver la causa dentro del plazo previsto en la CRE para su sustanciación.
43. Por las consideraciones anotadas, este Organismo Constitucional concluye que la inobservancia de los plazos constitucionales dentro del habeas corpus produjo una vulneración al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

4.2. Sobre la garantía de motivación

4.2.1. Sentencia dictada por el Tribunal de Garantías (primera instancia)

44. El derecho a la motivación se encuentra consagrado en el artículo 76 (7) literal l) de la CRE:

*“No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho”*³⁴.

45. En ese sentido, una violación de la garantía de la motivación ocurre ante dos posibles escenarios, con iguales efectos: **(a) La insuficiencia de motivación**, cuando se incumplen alguno de los criterios que nacen de la propia Constitución como son la enunciación de las normas y la explicación de la pertinencia de su aplicación al caso concreto; y **(b) La inexistencia de motivación**, siendo esta una ausencia completa de

de hábeas corpus o para la adopción de la medida cautelar culturalmente apropiada, el Tribunal de hábeas corpus suspenderá la audiencia. Durante este tiempo realizará los esfuerzos necesarios para mantener reuniones con las autoridades indígenas que posibiliten un diálogo intercultural, estudiar las distintas medidas alternativas a la prisión preventiva que aseguren la comparecencia de las personas al proceso penal y que puedan cumplirse en el ámbito y territorio de las comunidades, así como contar con los elementos suficientes para resolver la acción de hábeas corpus propuesta. La suspensión de la audiencia tendrá un plazo razonable y deberá evitar dilaciones innecesarias”.

³² Fs. 22 del expediente de primera instancia.

³³ Fs. 29 del expediente de primera instancia.

³⁴ A su vez, el artículo 4.9 de la LOGJCC establece, entre los principios procesales, que la justicia constitucional debe sujetarse a la motivación, y lo recoge de la siguiente manera: “La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso”.

argumentación de la decisión. En tal sentido, la inexistencia constituye una insuficiencia radical que impide tener un argumento mínimo necesario para considerar motivada una sentencia³⁵. Además, este Organismo ha hecho referencia a la argumentación jurídica **(c) aparente**, que se configura cuando a primera vista, cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero alguna de ellas es, en realidad, inexistente o insuficiente porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional³⁶. En la jurisprudencia de esta Corte, se han identificado los siguientes tipos de vicio motivacional, aunque esta enumeración no debe entenderse como una tipología estricta ni cerrada: (3.1) incoherencia³⁷; (3.2) inatinencia; (3.3) incongruencia; e, (3.4) incomprensibilidad.

46. De especial relieve es la suficiencia motivacional de las garantías jurisdiccionales. En este contexto, hay peculiaridades relativas al imperativo de tutelar los derechos fundamentales que deben ser atendidas por el juez, y que elevan el estándar de suficiencia exigible a una argumentación jurídica³⁸. Entonces, al tratarse de garantías jurisdiccionales, los jueces y juezas tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: **(i)** enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda la decisión, **(ii)** explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; y, **(iii)** realizar un análisis para verificar la existencia o no de vulneración a los derechos, si en dicho análisis no se determina la existencia de vulneraciones a los derechos, sino más bien conflictos de índole infra constitucional, le corresponde al juez determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto³⁹.
47. Ahora bien, al resolverse una acción de hábeas corpus, la motivación de los fallos por parte de los operadores de justicia, exige un estudio acorde a su objeto y naturaleza, mismo que se encuentra establecido en la CRE, la LOGJCC y desarrollado por la

³⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1320-13-EP/20 de 27 de mayo de 2020, párr. 39.

³⁶ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de 2021, párr. 71.

³⁷ Así, hay **incoherencia** cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica: o bien, una contradicción entre los enunciados que las componen –sus premisas y conclusiones– (incoherencia lógica), o bien, una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión (incoherencia decisional). Lo primero se da cuando un enunciado afirma lo que otro niega; y lo segundo, cuando se decide algo distinto a la conclusión previamente establecida. Hay **inatinencia** cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se esgrimen razones que no “tienen que ver” con el punto controvertido, esto es, no guardan relación semántica general con la conclusión final de la argumentación y, por tanto, con el problema jurídico de que se trate. Dicho de otro modo, una inatinencia se produce cuando el razonamiento del juez “equivoca el punto” de la controversia judicial. Hay **incongruencia** cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica, o bien, no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales o bien, no se ha contestado alguna. La **incongruencia** frente a las partes no surge cuando se deja de contestar cualquier argumento de las partes, sino solo los relevantes, es decir, aquellos argumentos que inciden significativamente en la resolución del correspondiente problema jurídico. Hay **incomprensibilidad** cuando un fragmento del texto (oral o escrito) en que se contiene la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica de toda argumentación jurídica no es razonablemente inteligible para un profesional del Derecho o –cuando la parte procesal interviene sin patrocinio de abogado (como puede suceder, por ejemplo, en las causas de alimentos o de garantías jurisdiccionales) – para un ciudadano o ciudadana.

³⁸ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de 2021, párr. 103

³⁹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1285-13-EP/19 de 4 de septiembre de 2019, párr. 28.

jurisprudencia constitucional. Para tal efecto, al momento de dictar sentencia las y los jueces deben considerar, al menos, los siguientes parámetros:

- i. *Análisis integral*. - cuando sea alegado o cuando las circunstancias lo requieran – las y los jueces deberán analizar: (i) la totalidad de la detención, (ii) las condiciones actuales en las cuales se encuentra la persona privada de libertad y (iii) y el contexto de la persona, en relación a si la persona pertenece a un grupo de atención prioritaria. En este sentido, dado que una medida de privación de libertad que en un inicio era constitucional podría convertirse en ilegal, arbitraria o ilegítima o ser implementada en condiciones que amenacen o violen los derechos a la vida o integridad de la persona, las y los jueces que conocen este tipo de acciones se encuentran obligados a verificar, en todo momento, que la detención no se haya tornado arbitraria, ni derivada de una orden de detención ilegal⁴⁰.
 - ii. *Respuesta a las pretensiones relevantes*. - De igual forma, al momento en que las y los administradores de justicia motiven sus decisiones, estas deben responder a todas las pretensiones relevantes⁴¹ expuestas en la demanda y/o audiencia o que sean identificables del relato del accionante de acuerdo al objeto y naturaleza de la acción de hábeas corpus. En particular, se debe brindar una respuesta sobre las violaciones a derechos invocados y a las reparaciones integrales que soliciten los accionantes. Así, estas pueden referirse, entre otros, a que se ordene su libertad considerando si esta es ilegal, arbitraria o ilegítima⁴², se dicten medidas para proteger su vida, salud⁴³ o integridad⁴⁴ personal durante la privación de la libertad, sea esta en un centro de privación de la libertad, por parte de particulares⁴⁵ o en cualquier otro lugar donde la libertad de la persona se encuentre sustancialmente restringida sin que dicho lugar se califique necesariamente como un centro de detención⁴⁶.
48. El accionante alega que la decisión impugnada no se pronunció respecto de la supuesta vulneración a la integridad personal⁴⁷, misma que, a su juicio, se habría perpetrado en el marco del motín de 10 de septiembre de 2015. Corresponde, entonces, verificar si la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales motivó su sentencia acorde a los parámetros antes citados.

⁴⁰ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-11-JH/20 de 22 de julio de 2020, párr. 32.

⁴¹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 565-16-EP/21 de 03 de febrero de 2021, párr. 29.

⁴² Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-11-JH/20 de 22 de julio de 2020, párr. 83 (1).

⁴³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 209-15-JH/19 de 12 de noviembre de 2019.

⁴⁴ Respecto a la protección de la integridad personal y vida en centros de privación de la libertad, véase el caso 365-18-JH/21.

⁴⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 166-12-JH/20 de 08 de enero de 2020.

⁴⁶ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 335-13-JP/20 de 12 de agosto de 2020, párr. 97

⁴⁷ En específico, el accionante en su demanda aduce que “los policías atentaron contra mi vida e integridad pues me dispararon un cartucho de perdigones en el lado izquierdo parte baja de mi espalda”

49. El análisis constitucional del caso inicia a partir del **tercer considerando**, del cual destacan las siguientes consideraciones:
- a. Explicación del alcance de la acción de hábeas corpus en la normativa constitucional y legal (arts. 88 CRE y 43 y 44 de la LOGJCC).
 - b. Delimitación de las pretensiones del accionante. En particular, reveló que el accionante *“recurrir a esta acción para proteger la vida y la integridad física de la persona privadas (Sic) de la libertad”*.
 - c. Mención de las pruebas ordenadas de oficio, esto es un informe de médico legista.
 - d. Conclusión del Tribunal de Garantías relacionada a que *“las circunstancias del hecho narrado y por supuesto doloroso, no se ajusta al contexto ni a la afirmación de que por la falta de atención médica, psicológica y social oportuna al PPL dentro del Centro de Rehabilitación sean signos o síntomas de que se le haya torturado, lo que sí ha quedado evidenciado es la falta de atención médica especializada al recurrente, lo cual sin duda ha menoscabado su estado general de salud, considerando sus edad actual (44 años)”* (énfasis añadido).
50. Por su parte, en el **cuarto considerando** la judicatura accionada resumió las normas constitucionales que estimó aplicables al caso⁴⁸.
51. Por último, aceptó la acción de hábeas corpus al considerar que el CRSC no brindó la atención médica que necesitaba el accionante, lo que generó una violación al derecho a la salud. En adición, se verifica que desestimó las solicitudes de reparación integral referentes a posibles disculpas públicas y el pedido expreso del accionante de traslado a un centro de detención provisional.
52. Conforme se detalló en los párrafos *ut supra*, los jueces accionados enunciaron las normas constitucionales y legales que estimaron pertinentes para: (i) establecer el objeto de la acción de hábeas corpus y (ii) definir el contenido de los derechos supuestamente vulnerados. En particular, contrastaron esta normativa a los hechos del caso y concluyeron que el CRSC vulneró los derechos a la salud y a la atención prioritaria de las personas privadas de la libertad, por lo que, la sentencia cumple con enunciar normas y explicar su pertinencia.
53. En lo alusivo al tercer parámetro, esto es a resolver las vulneraciones a derechos alegadas, es pertinente recordar que el accionante, en su demanda, argumentó los siguientes cargos:

⁴⁸ En el aludido acápite de la sentencia se enunciaron los siguientes artículos de la CRE 11(2), 32, 35, 51 (3) (4) (6) y 66 (1) (2) (3) y 12 del Código Orgánico Integral Penal.

- a.* En el marco del motín de 10 de septiembre de 2015 se perpetraron tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes penitenciarios, mismos que conllevaron a una afectación a su derecho a la integridad física.
 - b.* Producto de la falta de atención médica dentro del CRS por más de dos años se violó su derecho a la salud.
- 54. Este Organismo Constitucional observa que la sentencia sujeta a análisis no resolvió el cargo relacionado con la vulneración del derecho a la integridad física, por el disparo que sufrió en su espalda durante el motín de 10 de septiembre de 2015. De esta manera, se observa que la sentencia impugnada únicamente se pronunció respecto del cargo de falta de atención médica, dejando sin contestar un cargo relevante solicitado por el accionante.
- 55. En función de las consideraciones expuestas, este Organismo Constitucional concluye que la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación.

4.2.2. Sentencia dictada por la Sala Provincial (sentencia de apelación)

- 56. El accionante aduce que la decisión dictada en el marco del recurso de apelación no analizó la alegada vulneración de su derecho a la integridad física en relación con los tratos crueles, inhumanos o degradantes que produjeron como efecto la necesidad de su atención médica inmediata. Además, señala que al examinarse el cargo de separación de personas privadas de la libertad por categorías, no se brinda una conclusión completa pues *“hace mención a normas y sentencias que es de conocimiento sin motivar que es lo que se puede precisar de estas y que es lo que ha podido recabar la Sala con el fin de resolver ante lo pedido, es decir carece de razonabilidad y comprensión, tan solo se enuncian normas y sentencias no existe un análisis de estas con los hechos narrados y probados en el proceso”*.
- 57. A fin de verificar si la decisión analizada contiene la motivación mínima, que incluye pronunciarse sobre los argumentos relevantes, se debe considerar que el accionante presentó los siguientes cargos en su demanda de hábeas corpus y en la audiencia de apelación: (i) violación del derecho a la integridad física por lo ocurrido durante el motín, (ii) configuración de una privación de la libertad ilegal y arbitraria por haberse privado al accionante en un pabellón de máxima seguridad y (iii) falta de atención médica, por más de dos años, como violatoria al derecho a la salud.
- 58. En el **considerando sexto** de la sentencia, se observa el siguiente análisis por parte del tribunal de alzada:
 - a.* En el **apartado 6.1.** indicó que la sentencia dictada en primera instancia reconoció la vulneración de los derechos a la salud *“por no haber recibido*

oportunamente la atención médica especializada, de lo cual se ha responsabilizado a [las entidades accionadas]”.

- b.** El **apartado 6.2.** resume las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de primera instancia.
- c.** El **apartado 6.3.** responde el pedido de traslado del accionante a otro centro de privación de la libertad. Afirmó que al verificarse una violación de la vida e integridad física de un privado de la libertad *“el Juzgador tiene plenas facultades para ordenar las medidas urgentes cautelares más idóneas respecto del derecho que se garantiza (...)”*. En relación con el caso del accionante, concluyó que *“no se ha justificado ni se han establecido las presuntas amenazas, ni las personas privadas de la libertad que realizan las amenazas ni el nombre de quien las realiza quedando en una mera solicitud sin sustento, por lo que la Sala debe ratificar la negativa al traslado por las presuntas amenazas ni como reparación”*.
- d.** En el **apartado 6.4.** fundamentó la negativa de instalación de un brazalete electrónico, solicitada por el accionante, en el sentido de que *“ni se justifica que el accionante tenga una enfermedad catastrófica que amerita una decisión de esa naturaleza dentro de una acción constitucional”*.
- e.** En el **apartado 6.5.** trató el cargo sobre la posible ilegalidad y arbitrariedad del traslado del accionante a un pabellón de máxima seguridad, aún cuando no tenía una sentencia penal ejecutoriada, sino una orden de prisión preventiva. En respuesta, la Sala puntualizó que la separación por categorías en los centros de privación de la libertad es un mecanismo destinado a proteger la vida e integridad personal que debe ser respetada por quienes autorizan la privación de las personas de la libertad en tales centros como por los funcionarios a quienes se les confía su control y protección.
- f.** Así también, en el **apartado 6.5.** citó, extractos de las sentencias del caso *Cárcel de Urso Branco c. Brasil* y del caso *del Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay*, expedidos por la Corte IDH y con base en el artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal⁴⁹ arguyó que esta *“faculta disponer su internamiento en otro centro que preste las seguridades necesarias con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros privados de libertad en el caso de que la persona a la que se la ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de extrema peligrosidad”*.

⁴⁹ La norma señala que los centros de privación de libertad se clasifican en centros de privación provisional de libertad (CDP), en los que permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente; y centros de rehabilitación social (CRS) en los que permanecen las personas a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada.

59. De la síntesis de la sentencia *in examine*, se colige que la judicatura accionada enunció las normas jurídicas y jurisprudencia que estimó aplicables al caso bajo estudio. En adición, la sentencia examina los cargos expuestos en la acción de hábeas corpus referentes a: **(a)** la falta de atención médica como vulneratoria al derecho a la salud **(6.1.)** y **(b)** el traslado del accionante a otro centro de privación de la libertad o instalación de un brazalete por una posible violación del derecho a la integridad física **(6.2. - 6.3.)**.
60. Sin perjuicio de lo anterior, en relación al punto **(b)**, aún cuando la judicatura hace mención a las acciones que pueden tomar los jueces en un hábeas corpus para tutelar la integridad física cuando constatan una afectación a este derecho, esta no responde sí, producto del motín y por la falta de atención médica oportuna, se vulneró el derecho a la integridad personal del accionante en su elemento a la integridad personal. Asimismo, de la revisión de la sentencia de apelación se observa que, en su **apartado 6.5**, luego de sintetizar el cargo referente a que la privación de la libertad se tornó en arbitraria e ilegal producto de que se lo hizo en el pabellón de máxima seguridad mientras cumplía una prisión preventiva, se limitó a citar las normas del COIP que estimó aplicables y sentencias de la Corte IDH, sin brindar explicación alguna de cómo estas normas se subsumían al caso concreto. Por lo que, aun cuando enuncia normas no explica su pertinencia al caso. En otras palabras, la Sala Provincial, al limitarse a enunciar normas y precedentes en abstracto y sin relacionarlos a los hechos del caso, incumplió con su deber de establecer la pertinencia de su aplicación al caso bajo análisis.
61. Por las razones expuestas *supra*, se colige que la sentencia analizada, en lo referente a los cargos antes descritos, no cuenta con una fundamentación jurídica mínima, esto es, “*la enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, así como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso*”⁵⁰(énfasis añadido). Al respecto, la Corte IDH ha sostenido que la fundamentación jurídica no puede consistir en “*la mera enumeración de las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas*”⁵¹. O, en términos de la jurisprudencia de esta Corte, “[l]a motivación no puede limitarse a citar normas”⁵² y menos a “*la mera enunciación inconexa [o “dispersa”⁵³] de normas jurídicas*”⁵⁴ sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación del Derecho en las que se funda la resolución del caso⁵⁵.

⁵⁰ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21, 20 de octubre de 2021, párr. 61-62.

⁵¹ Corte IDH, Caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de octubre de 2015, párr. 265; y, Caso Ramírez Escobar y Otros vs. Guatemala, sentencia de 9 de marzo de 2018, párr. 189.

⁵² Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 274-13-EP/19, de 18 de octubre de 2019, párr. 46. En el mismo sentido, véase la sentencia No. 1357-13-EP/20, de 8 de enero de 2020, párr. 32.

⁵³ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1258-13-EP/19, de 11 de diciembre de 2019, párr. 23.

⁵⁴ Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. 860-12-EP/19, de 4 de diciembre de 2019, párr. 26; No. 1258-13-EP/19, de 11 de diciembre de 2019, párr. 23; y, No. 1338-13-EP/20, de 1 de julio de 2020, párr. 41.

⁵⁵ Los artículos 5.18 del Código Orgánico Integral Penal (en adelante, “COIP”) y 17.3 de la LOGJCC aluden al elemento de la fundamentación normativa suficiente. Y el artículo 89 del Código Orgánico General de Procesos (en adelante, “COGEP”), al respecto, prescribe: “[l]as sentencias se motivarán expresando los razonamientos [...] jurídicos, que conducen [...] a la interpretación y aplicación del derecho”. Sobre la

62. En consecuencia, este Organismo constata que la judicatura accionada dejó sin resolver los cargos referentes a una posible privación de la libertad ilegal y arbitraria producto de la privación de la libertad en el pabellón de máxima seguridad mientras cumplía una prisión preventiva y a la afectación a la integridad física.
63. Por estas consideraciones, este Organismo Constitucional considera que la falta de explicitación de la aplicación de las normas al caso y la omisión de pronunciarse sobre dos de los argumentos relevantes, constituyen omisiones contrarias a la garantía de motivación.

V. Análisis de mérito

5.1. Verificación de procedencia del análisis de mérito

64. Esta Corte Constitucional ha determinado que, en ciertos casos, excepcionalmente y de oficio, podrá entrar a examinar la situación de fondo decidida por los jueces de instancia dentro de una garantía jurisdiccional. Con ello, la Corte también podrá analizar posibles vulneraciones a derechos constitucionales incurridas por particulares o autoridades no judiciales, es decir puede resolver sobre los méritos del caso⁵⁶.
65. Para el efecto, se debe observar los siguientes requisitos: (1) que la autoridad judicial haya violado el debido proceso u otro derecho de las partes en la sentencia impugnada; (2) que *prima facie* los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por las autoridades judiciales inferiores; (3) que el caso no haya sido seleccionado por esta Corte para su revisión; y (4) que el caso al menos cumpla con uno de los criterios que a continuación se indican: gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional o la inobservancia de precedentes establecidos por este Organismo⁵⁷.
66. En el caso sujeto a análisis, se cumple con el requisito (1) pues se constató que las judicaturas accionadas vulneraron los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en la garantía de motivación. Asimismo, se cumple con el requisito (2) ya que durante la privación de la libertad del accionante, producto del amotinamiento del 10 de septiembre de 2015 y por la falta de atención médica por más de dos años, a *prima facie*, se podrían haber vulnerado sus derechos a la libertad, a la integridad física y a la salud. Toda vez que, como consecuencia de la falta de atención en la herida, en la actualidad el accionante posee una discapacidad física del 71%.

fundamentación normativa, el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que “en el Estado de Derecho hay que dar razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado (STC 24/1990, fundamento jurídico 4)”, STC No. 184/1998, de 28 de septiembre de 1998, FJ 2.

⁵⁶ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 176-14-EP/19 de 16 de octubre de 2019, párr. 50 y Sentencia No. 1973-14-EP/20 de 21 de octubre de 2020, párr. 21.

⁵⁷ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 176-14-EP/19 de 16 de octubre de 2019, párr. 55.

También se cumple con el presupuesto (3) pues se ha verificado que el caso no ha sido seleccionado por esta Corte para su revisión.

67. Por último, esta Corte estima que se cumple con el (4) requisito porque de los hechos del caso se desprende el criterio de **gravedad**. Esto, en razón que se reclaman violaciones a los derechos a la integridad física de una persona en condición de doble vulnerabilidad, esto es, una persona privada de la libertad y con una discapacidad física. Por otro lado, el caso se encuentra revestido de **relevancia nacional** ya que lo acontecido en perjuicio del accionante refleja un problema estructural que persiste en la actualidad en varios centros de privación de la libertad en los que ocurren actos violentos que afectan a la vida e integridad física de las personas privadas de libertad⁵⁸.

5.2. Resolución de problemas jurídicos

68. El accionante refiere como argumentos principales en su demanda de hábeas corpus los siguientes: (i) *“los policías atentaron contra mi vida e integridad pues me dispararon un cartucho de perdigones en el lado izquierdo parte baja de mi espalda”*; (ii) *“mi herida se infectó al punto que el médico que limpió mi herida me dijo que necesitaría un injerto de músculo y cirugía; aunque el médico me dijo que pidió autorización para llevarme a un hospital y poderme atender debidamente, jamás me brindó atención médica (...)”*; y, (iii) *“me preocupa que no se haya tomado las acciones necesarias para garantizar mi acceso a la atención a la salud oportuna de calidad y especializada a (sic) que tengo derecho, lo que ha puesto en evidente riesgo mi vida e integridad física, siendo víctima de TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES”* (énfasis del original). Asimismo, conforme consta a fs. 24 del expediente de segunda instancia el accionante alegó en la audiencia que al estar en *“un pabellón de máxima seguridad, que a criterio del Centro están las personas más peligrosas y que sobre todo tienen una sentencia ejecutoriada (...) la norma [el artículo 203 de la Constitución] es clara con la separación, de personas procesadas con la de personas sentencias, esta persona apenas era procesada tenía una prisión preventiva”*.
69. Este Organismo Constitucional resolverá la demanda de hábeas corpus presentada por el accionante respecto del CRSC en función de los cargos de la demanda y en el recurso de apelación. Por tal motivo, corresponde verificar si: (a) se generó una privación de libertad ilegal y arbitraria cuando se lo ubicó en un pabellón de máxima seguridad por parte del CRSC; (b) se vulneró su derecho a la integridad personal producto de la falta de atención durante más de 2 años de un disparo de perdigón en su espalda, en el marco del motín suscitado el 10 de septiembre de 2015, y (c) se violó el derecho a la salud y a la vida digna al no recibir atención médica oportuna por parte del CRSC.

⁵⁸ Esta Corte ha hecho mención del problema estructural de los centros de privación de la libertad, entre otros casos en Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen, 1-19-EE, 2-19-EE de 30 de mayo de 2019, Dictamen 6- 20-EE, de 19 de octubre de 2019, Dictamen 5-21-EE de 06 de octubre de 2021 y Auto de seguimiento Auto de fase de seguimiento No. 4-20-EE/21 y acumulado de 03 de marzo de 2021.

5.2.1. Sobre la supuesta privación de la libertad ilegal, arbitraria e ilegítima al ser ubicado en un pabellón de máxima seguridad sin una sentencia penal ejecutoriada

70. El artículo 89 de la CRE y el 43 de la LOGJCC establecen que el objeto de la acción de hábeas corpus es recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.
71. Así, todo proceso de privación de la libertad debe efectuarse con estricto apego a la CRE, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, caso contrario esta privación puede tornarse en ilegal, arbitraria e ilegítima y, consecuentemente, devenir en una vulneración del derecho a la libertad personal. Al respecto, esta Corte ha determinado que una privación de la libertad es:

Ilegal: “cuando una detención o privación de libertad es ejecutada en contravención a los mandatos expuestos de las normas que componen el ordenamiento jurídico, ya sea en el aspecto material o formal. En el aspecto material, la detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley y la privación de la libertad debe mantenerse exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la detención y posterior privación de la libertad debe realizarse en cumplimiento del procedimiento objetivamente definido por la ley”.

Arbitraria: cuando “se ha realizado utilizando causas y métodos que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos del individuo, aunque se haya realizado en cumplimiento de las normas legales”⁵⁹.

72. Como quedó establecido, el accionante fue privado de la libertad el 26 de agosto de 2015, producto de una orden de prisión preventiva. Con posterioridad a la emisión de la boleta de encarcelamiento, fue trasladado a la etapa transitoria y el 01 de septiembre de 2015 fue enviado al pabellón de máxima seguridad⁶⁰.
73. Frente a esta actuación, el legitimado activo alegó que, al no tener una sentencia penal en su contra, correspondía enviarlo a un centro de detención provisional⁶¹.
74. Entre las directrices del sistema de rehabilitación social previstas en el artículo 203 de la Constitución consta que “[ú]nicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social”.

⁵⁹ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 207-11-JH, 22 de julio de 202, párr. 83 (1 y 2).

⁶⁰ De acuerdo con lo manifestado por el abogado del accionante en la primera audiencia fue “por disposición del director”. Minuto 9:17.

⁶¹ Esta alegación fue presentada en la audiencia de primera instancia (27 de junio de 2017) en la audiencia de apelación de la acción de hábeas corpus (17 de julio de 2017) y en la audiencia de acción extraordinaria de protección (10 de diciembre de 2020).

75. Esta norma tiene relación con el principio constitucional de presunción de inocencia, puesto que las personas con orden de prisión preventiva, al tener en desarrollo un proceso penal en su contra, no han perdido su estatus de inocencia. Por tal motivo, el tratamiento de una persona procesada por parte de las autoridades públicas, con independencia de las medidas cautelares que se les ordene, debe ser el de una persona inocente que está siendo investigada.
76. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (**Corte IDH**) ha reconocido que los Estados tienen la obligación de establecer un sistema de clasificación de los reclusos en los centros penitenciarios de manera que se garantice que los procesados sean separados de los condenados con sentencia ejecutoriada y que reciban un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada⁶².
77. Asimismo, la regla 11 (b) de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (**en adelante Reglas Mínimas**) para el Tratamiento de los Reclusos establece que: “[l]os reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por consiguiente: b) los reclusos en espera de juicio estarán separados de los penados”.
78. Así lo ha previsto también la legislación penal. En función de lo establecido por el artículo 678 del COIP, por regla general,⁶³ las personas con orden de prisión preventiva deben permanecer en centros de detención provisional por el tiempo máximo previsto para el efecto o hasta su sustitución o revocatoria⁶⁴.
79. Se debe destacar que el mismo COIP establece la salvedad de que “[e]n caso de que a una persona que se la ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros privados de libertad, se podrá disponer su internamiento en otro centro que preste las seguridades necesarias”.

⁶² Corte IDH, caso J. vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 2013. Corte IDH, asunto de la cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales, resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 2002.

⁶³ **El artículo 678** Código Orgánico Integral Penal establece: “Las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad y los apremios, se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se clasifican en: 1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia. En caso de que a una persona que se la ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros privados de libertad, se podrá disponer su internamiento en otro centro que preste las seguridades necesarias”.

⁶⁴ **El artículo 541** del Código Orgánico Integral Penal establece “Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas: 1. No podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2. No podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años”

80. Entonces, solo de forma excepcional, se puede enviar a una locación diferente a un centro de detención provisional a una persona con orden de prisión preventiva, siempre y cuando se motive la peligrosidad de la persona procesada y la incapacidad de garantizar la seguridad del centro y de los otros procesados.
81. En este caso, esta Magistratura observa que el CRSC no justificó las razones por las que el accionante fue enviado directamente al pabellón de máxima seguridad del centro de rehabilitación social, ni ha demostrado que se cumpla el presupuesto de excepción previsto en el COIP. Por lo que, esta Corte considera que la privación de la libertad del accionante, al encontrarse únicamente con una medida de prisión preventiva, se dio en franca contravención del mandato expreso del artículo 203 de la CRE y de los instrumentos internacionales de derechos humanos enunciados en los párrafos precedentes y por ende devino en ilegal. Adicional a ello, dado que el traslado al pabellón de máxima seguridad desconoció el principio de presunción de inocencia, la privación de la libertad también se tornó en arbitraria. Por último, se debe recordar que la separación adecuada de internos es una medida de seguridad que previene la violencia carcelaria y garantiza la integridad personal de las personas privadas de la libertad.
82. De esta manera, esta Corte considera necesario establecer que los argumentos enunciados en el párrafo *ut supra* sí podían ser resueltos por las autoridades judiciales que conocieron el caso del accionante. Así, su desconocimiento acarrea la inobservancia de mandatos expresos sobre el aspecto formal de la detención, como sería la falta de justificación sobre la necesidad de detener al accionante en un centro para personas con sentencia ejecutoriada, más aún en un pabellón de extrema seguridad.
83. En función de lo expuesto, se concluye que la privación de libertad del accionante en un pabellón de máxima seguridad de un Centro de Rehabilitación Social sin contar con una sentencia penal ejecutoriada y sin justificación por parte de las autoridades carcelarias, fue ilegal y arbitraria⁶⁵.

5.2.2. Sobre la supuesta violación del derecho a la integridad personal

84. La CRE, en su artículo 66 (3) consagra el derecho a la integridad personal, mismo que incluye las siguientes dimensiones: **(a) la integridad física, psíquica, moral y sexual;** **(b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.** El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o

⁶⁵ En este punto, es menester aludir a que el Tribunal de Garantías penales en auto de 14 de diciembre de 2018 ordenó remitir el proceso al juez de garantías penitenciarias para que determine las medidas alternativas a la privación de la libertad aplicables para que el accionante cumpla con el resto de su condena. Es así como, el 14 de enero de 2019 la Unidad Judicial Penal de Latacunga ordenó que el accionante se presente periódicamente ante su judicatura y la prohibición de salida del país, y que una vez que esté disponible se coloque un dispositivo de vigilancia electrónico. Por lo que en la actualidad el accionante se encuentra cumpliendo su correspondiente pena fuera del CRSC.

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual; (c) *La prohibición de la tortura*, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; y, (d) *la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica* que atenten contra los derechos humanos.

85. En función de lo alegado por el legitimado activo, corresponde a esta Corte analizar la supuesta vulneración del derecho a la integridad personal en el siguiente orden: (i) elemento de una vida libre de violencia, (ii) elemento de prohibición de tortura y (iii) elemento a la integridad física.

(i) Sobre la vida libre de violencia

86. Este Organismo recuerda que el Estado está obligado a prevenir la violencia dentro de los centros de privación de libertad, esta obligación implica no sólo abstenerse de provocar hechos violentos a través de los agentes públicos, sino también prevenir y controlar las diferentes formas de violencia que provengan de terceros. La falta de prevención o la omisión de actuar frente a la violencia ejercida dentro de los centros de privación de libertad conlleva la responsabilidad estatal⁶⁶.
87. Al respecto, las Reglas Mandela, en su regla primera, establecen la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes “*contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes*”.
88. De igual forma, los Principios de Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, en el principio No. 1, resaltan la obligación estatal de protección a las personas privadas de la libertad contra: “*todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penales crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona. No se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, u otra emergencia nacional o internacional, para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad*”.
89. Bajo estas consideraciones, cuando el Estado, a través de sus autoridades, no ejerce el control efectivo de los centros penitenciarios, pueden generarse sublevaciones de personas privadas de la libertad y/o motines como los detallados por el accionante, este tipo de actos pueden poner en riesgo la vida e integridad de las personas privadas de libertad, del personal que labora en dichos centros o de terceras personas como

⁶⁶ Corte Constitucional. Sentencia No. 365-18-JH/21 y acumulados.

familiares o visitantes. Por lo que, es deber de las autoridades estatales competentes tomar las medidas necesarias para prevenir este tipo de sucesos⁶⁷.

90. En este marco, el uso de la fuerza dentro de los centros de privación de libertad por parte del Estado debe ser una medida de *ultima ratio* y con estricta observancia a los principios que rigen el uso de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución⁶⁸.
91. Además, con respecto a la prueba de las lesiones en el marco del uso progresivo de la fuerza, se debe considerar que las personas privadas de la libertad -al encontrarse bajo la custodia estatal- se les dificulta la obtención de pruebas, las cuales podrían estar en posesión de las entidades accionadas. Así, cualquier señal que demuestre la existencia de una posible lesión se convierte en elemento probatorio fundamental, así como cada una de las valoraciones médicas que se les realicen. Al respecto, este Organismo Constitucional en la sentencia 365-18-JH/20 y acumulados señaló que:

“4. La carga de la prueba recae sobre las entidades accionadas según lo dispuesto en el artículo 16 (4) de la LOGJCC. Es obligación del Estado dar una explicación satisfactoria y convincente de los hechos y aportar elementos probatorios adecuados y suficientes para desvirtuarlos. En caso de que incumpla esta obligación, el juzgador presumirá que el Estado, en razón de la inversión de la carga de la prueba y de tener bajo su custodia a las personas privadas de la libertad, es el responsable, para efectos del hábeas corpus, por las lesiones que exhiban estos últimos. Los exámenes médicos que den cuenta de las lesiones que presentan las personas privadas de la libertad cobrarán especial relevancia frente a otros elementos probatorios, al momento de determinar si se produjo cualquier forma de maltrato.

6. La jueza o juez, en atención a los elementos fácticos de cada caso y frente a dudas razonables, ponderará la valoración del caso a favor de la víctima de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. En caso de que las autoridades estatales no puedan probar lo contrario, la versión de la persona privada de libertad, a efectos de la acción de hábeas corpus, se presumirá cierta. El Estado ostenta la responsabilidad y carga probatoria al tener a las personas bajo su custodia”.

92. En lo concerniente al origen de la herida que sufrió el accionante, de lo narrado por el accionante, se advierte que aproximadamente a las 9h00 a.m. del 10 de septiembre de 2015 inició un motín en el CRSC en el que varias personas privadas de la libertad incurrieron en actos de violencia en contra de agentes penitenciarios y otros privados de la libertad⁶⁹.

⁶⁷ Esta Corte ha hecho mención del problema estructural de los centros de privación de la libertad, entre otros casos en Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen, 1-19-EE, 2-19-EE de 30 de mayo de 2019, Dictamen 6- 20-EE, de 19 de octubre de 2019, Dictamen 5-21-EE de 06 de octubre de 2021 y Auto de seguimiento Auto de fase de seguimiento No. 4-20-EE/21 y acumulado de 03 de marzo de 2021.

⁶⁸ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 33-20-IN/21 de 5 de mayo de 2021, párr. 120.

⁶⁹ El 10 de septiembre de 2015 se registraron protestas de interno en la cárcel de Latacunga. Los hechos se desataron luego de que un interno sufriera caída desde segundo piso del pabellón de "máxima especial" y

93. Según lo alegado en la demanda de hábeas corpus, el día en el que ocurrió el motín, el accionante se encontraba en la celda “*CIC del Pabellón de máxima seguridad*”⁷⁰. En el curso del motín, un grupo de agentes penitenciarios ingresaron a su celda y “*lo bajaron a golpes al patio del pabellón de máxima seguridad*”⁷¹ y “*atan con plásticos sus manos a su espalda*”⁷².
94. Aproximadamente a las 15h00 p.m. “*cuando estaba sometido en el suelo un agente lo dispara con un cartucho de perdigones en la parte baja posterior de su espalda, disparo que le produce una herida de la cual empieza a salir abundante sangre*”⁷³. A pesar de la herida, los golpes al accionante habrían seguido hasta las 19h00 p.m.⁷⁴.
95. Según lo postulado por el accionante⁷⁵, la actuación de los agentes penitenciarios fue deliberada y desproporcionada pues al ingresar al pabellón habrían disparado “*balas de goma*”⁷⁶ con “*armas de fuego*” “*a todo mundo a quemarropa*” sin distinciones⁷⁷. Sin considerar que dentro de los privados de la libertad amotinados “*no se encontraba el señor [accionante], estaba alejado, estaba incluso en otro Pabellón*”⁷⁸, tanto así que no fue “*investigado ni sancionado por los hechos del 10 de septiembre de 2015*”⁷⁹ “*porque no fue parte del motín*”⁸⁰. Es más, “*fueron sentenciadas las personas que si fueron parte del motín*”⁸¹.

fue evacuado 3 horas después del accidente. <https://www.cdh.org.ec/informes/277-5-anos-del-nuevo-modelo-carcelario.html>

<https://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/10/nota/5116142/amotinamiento-carcel-cotopaxi-lleva-casi-4-horas/>

⁷⁰ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 24:54.

⁷¹ Consta a fs. 61 del expediente el relato del abogado del accionante. Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 25:02.

⁷² Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 25:08.

⁷³ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 24:14.

⁷⁴ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 24:30. En la segunda audiencia celebrada en la Corte Constitucional el abogado del accionante precisó que la persona que disparó al accionante estaba encapuchada por lo que no se lo pudo identificar.

⁷⁵ Sobre estas alegaciones, la abogada Jenny Toapanta, en representación del CRSC, en la audiencia de segunda instancia se limitó a señalar que “el abogado ha expuesto que se usaron armas de fuego en el amotinamiento, lo cierto es que por parte del CRS-Cotopaxi, estuvimos a la espera de que la fuerza pública haga su trabajo y nosotros siempre precautelando sus derechos”.

⁷⁶ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 10:30.

⁷⁷ Este relato consta en la sentencia de segunda instancia.

⁷⁸ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 23:00.

⁷⁹ Este relato consta en la sentencia de segunda instancia.

⁸⁰ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 24:49.

⁸¹ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 24:30.

96. Producto de los hechos manifestados en el párrafo *ut supra* se le generó una herida profunda en la parte baja posterior izquierda de la espalda⁸². Entonces, recién cuando uno de sus compañeros de celda advirtió del sangrado, aproximadamente a las 19h00⁸³, fue “arrastrado”⁸⁴ y trasladado al Policlínico del CRSC, donde le extrajeron ocho perdigones de su espalda, y fue devuelto a su celda. Posteriormente, fue atendido por cuarenta y seis días con un tratamiento ambulatorio que consistía en aplicarle una “pomada”, antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios para curar su herida.
97. Así, conforme lo alegado por el accionante, y en virtud de que no existe una sentencia ejecutoriada en la que se confirme su participación del motín, se corrobora que el uso de la fuerza en su contra no respondió a una agresión, resistencia o actividad que ponga en peligro los derechos a la vida y/o integridad física de otros privados de la libertad o de los agentes penitenciarios. En tal virtud, se puede confirmar que el disparo propinado al accionante no fue una bala perdida como se ha alegado por parte de la entidad accionada; al contrario, al dispararle por la espalda y en el piso a quemarropa fue una acción meditada y deliberada por parte de la persona que ejerció la fuerza.
98. En todo caso, esta Corte estima necesario dejar en claro que aun cuando exista una sentencia ejecutoriada en la que se confirme la participación de una persona privada de la libertad en un motín, no significa que aquello per se responda a una agresión, resistencia o actividad que ponga en peligro los derechos a la vida y/o integridad física de otros privados de la libertad o de los agentes penitenciarios; más aún tratándose del caso del uso proporcional de la fuerza por parte de la policía.
99. Por lo expuesto, esta Corte estima que los hechos violentos -las acciones tendientes a controlar el motín dentro del CRSC- perjudicaron severamente la integridad del accionante en el elemento de una vida libre de violencia.

(ii) Sobre la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes

100. El accionante también arguyó que los hechos ocurridos en el marco del motín ocurrido el 10 de septiembre de 2015 constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
101. Esta Magistratura Constitucional ha enfatizado que no corresponde a la autoridad judicial que conoce el hábeas corpus determinar si los hechos materia de la demanda configuran el delito de tortura o su autoría, pues esto corresponde al proceso penal ordinario, pero sí compete a la autoridad judicial que conoce el hábeas corpus, disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad personal de las personas privadas de la libertad, y de ser el caso, remitir la información a Fiscalía para la

⁸² Conforme consta en la historia clínica No. 00103 de 24 de septiembre de 2015 emitida por el Dr. Edison Yáñez de la dirección distrital de salud N05D01 (fs. 1 a 10 del expediente de primera instancia). Además, constan fotos del accionante con las heridas y las balas que fueron extraídas.

⁸³ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 25:45.

⁸⁴ Consta en el relato de la audiencia sustanciada ante esta Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2020 en el minuto 26:15.

correspondiente investigación en la vía penal⁸⁵. También ha expresado que: *“si de la sustanciación de la acción de hábeas corpus se desprende que han existido violaciones a la integridad personal, la Sala de la Corte Provincial de Justicia ordenará las medidas que se requieran para la protección de la integridad personal, entre ellas, podrá ordenar la libertad siempre que, luego de un examen detenido y con la debida fundamentación, se considere que es la medida adecuada para garantizar el derecho a la integridad personal. En este caso podrá disponer las medidas alternativas a la prisión preventiva, hasta que la o el juez que conoce la causa penal revoque o sustituya las mismas”*⁸⁶.

102. Revisado el expediente se verifica que, a través del oficio No. FGE-CGAJP-DDHPC-2020-003928-O de 01 de octubre de 2020, el director nacional de derechos humanos y participación ciudadana de la Fiscalía General del Estado informó a la Corte Constitucional que ya existe un proceso de investigación por el delito de torturas perpetradas en contra del accionante signado con el No.05010181830241. Sin perjuicio de aquello, correspondía a las judicaturas accionadas examinar si procedía ordenar la libertad inmediata en virtud de una vulneración a su derecho a la integridad durante la privación arbitraria de su libertad. Si luego del análisis motivado de los juzgadores, aquello no era posible, debían ordenar el traslado solicitado, como medida de protección de su integridad personal. Además, de brindar la atención médica oportuna y necesaria, y demás medidas necesarias para garantizar su integridad personal.

103. Por lo que en este caso, no es procedente analizarlo ni volver a remitir el proceso a Fiscalía.

(iii) Sobre la integridad física

104. La dimensión física del derecho a la integridad personal permite a la población ser protegida contra cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo su cuerpo o la salud de este; y es deber del Estado proteger al individuo y preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles su integridad y salud.

105. El accionante aduce que el CRSC vulneró su derecho a la integridad física producto de la falta de atención en su herida por más de dos años, misma que fue provocada por un agente estatal durante un amotinamiento.

106. Del expediente constitucional se desprende que el 23 de septiembre de 2015 el accionante recibió su última atención médica para tratar su herida en la espalda. Ahora bien, pese a la revisión integral de los recaudos del proceso, no se observa otra atención orientada a tratar las consecuencias de la herida en la espalda, sino hasta la expedición de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales.

⁸⁵ Corte Constitucional. Sentencia No. 365-18-JH/21 y acumulados de 24 de marzo de 2021.

⁸⁶ Ibid.

- 107.** En tal sentido, se constata que el incumplimiento del deber de CRSC de brindar un tratamiento oportuno o coordinar un plan de acción para tratar las consecuencias del disparo del accionante en su espalda por más de dos años tuvieron como consecuencia que el accionante quede con su movilidad sustancialmente reducida y padezca una discapacidad física del 71%, misma que es confirmada con el certificado de discapacidad del Ministerio de Salud que consta a fs. 24 del expediente constitucional⁸⁷.
- 108.** Esta Corte recuerda que los centros de privación de la libertad y de detención provisional, y en general los establecimientos en los que las personas se encuentran privadas de su libertad, tienen el deber de generar condiciones en las que se proteja, en todo momento, la integridad física de las personas privadas de la libertad.
- 109.** Por todo lo expuesto, dado que se le provocó una grave herida y no se le brindó atención médica por más de dos años en el centro penitenciario se constata que el CRSC vulneró el derecho a la integridad física de Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez.

5.2.3. Sobre la presunta afectación al derecho a la salud

5.2.3.1. Alcance del derecho a la salud

- 110.** Como ya quedó establecido, el accionante alega que más allá de la atención que tuvo para tratar su herida días después del motín, no habría recibido atención médica por un lapso de dos años, lo cual habría afectado gravemente su derecho a la salud.
- 111.** La Constitución de la República del Ecuador y el ordenamiento jurídico⁸⁸ ecuatoriano dan especial importancia a la salud, pues es reconocida como un derecho (art. 32) y a la vez, como uno de los deberes primordiales del Estado (art. 3.1) que debe ser garantizado a través de políticas, programas y servicios de salud que integran el Sistema Nacional de Salud (artículo 358), y que debe regirse por los principios de calidad, eficiencia, eficacia y precaución⁸⁹.
- 112.** La salud es un derecho indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente⁹⁰. Entonces, el derecho a la salud implica no sólo la ausencia de

⁸⁷ Ministerio de Salud Pública. Certificado de discapacidad No. 343484 de 16 de mayo de 2018 (fs. 24).

⁸⁸ El derecho a la salud está además reconocido en numerosos instrumentos de derecho internacional que son vinculantes para el Ecuador: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.iv.e); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículos 11 y 12.1); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24.1); la Convención sobre la Protección de los trabajadores migratorios y sus Familiares (artículo 28); el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 25).

⁸⁹ Corte Constitucional. Sentencia No. 328-19-EP/20 de 24 de junio de 2020.

⁹⁰ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N° 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Art. 12), 22° período de sesiones, 2000, párr. 1.

afecciones o enfermedades, sino también un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral.

- 113.** En este marco, el derecho a la salud de los privados de libertad incluye la obligación del ente estatal en el que se encuentran privados de la libertad brindar toda la atención médica adecuada (dentro y fuera del centro penitenciario), el acceso a los diferentes tratamientos médicos y las demás medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares que presente el recluso.
- 114.** Así las cosas, las personas privadas de la libertad también tienen derecho al nivel más alto de salud posible que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas⁹¹.
- 115.** En esta misma línea, la Corte IDH en el caso Chinchilla Sandoval y Otros vs. Guatemala ha determinado que, en el caso de las personas con enfermedades degenerativas, pertenecientes a grupos vulnerables, *“la necesidad de protección de la salud, como parte de la obligación del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se puede deteriorar de manera progresiva”*. Esto en concordancia con la Carta Constitucional que prescribe la obligación de garantizar los recursos materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad⁹².

⁹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, principio X.

⁹² A su vez, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, en el principio X establece: *“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamientos de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. [...] El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de*

5.2.3.2. Verificación del cumplimiento de los elementos del derecho a la salud

116. Los hechos relevantes para constatar una posible transgresión del derecho a la salud en virtud de los cargos presentados son los siguientes:

- a. El mismo día del motín, a las 19h00 p.m., dado el abundante sangrado, el accionante fue trasladado al Policlínico del CRSC, donde le extrajeron ocho perdigones y procedieron a la limpieza de la herida. Luego, a decir del accionante, por cuarenta y seis días, se le suministró medicinas en un intento por cicatrizar la herida, lo que se confirma del historial clínico No. 00103⁹³.
- b. Obra de fojas 1 a 8 del cuaderno de primera instancia, la historia clínica N°. 00103, correspondiente a la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, en la cual consta, en el numeral 7 “*examen físico y diagnóstico*”, lo siguiente: “*Herida de más de 3 cm de diámetro en región de flanco izquierdo profunda del cual se extrae 8 perdigones, Herida de 3 cm en región parietal, hematoma en región occipital*”. En el numeral 13 “*plan de tratamiento*” consta “*Compresión y antibióticos en herida en flanco derecho*” y dentro de la medicación “*Diclofenaco, Dicloxacilina*”. Además, dentro del numeral 5 “*enfermedad actual y revisión de sistemas*” consta la siguiente anotación “*Se realiza referencia para valoración por especialista pero justicia no permite salida por cuestión de seguridad*”. En la misma historia clínica consta, además, que el accionante fue atendido los días 13, 15, 16, 18, 21, 22 y 23 de septiembre de 2015. En estas atenciones, los médicos respectivos señalan que curaron la herida y prescribieron antibióticos y analgésicos.
- c. Posterior a estas atenciones médicas, de acuerdo con el relato del accionante en su demanda de hábeas corpus y del expediente, no se constata más atención médica.
- d. Dictada la sentencia de primera instancia, consta documentación orientada a evidenciar el cumplimiento de las medidas ordenadas, así: (i) A fojas 34 del expediente de instancia consta el oficio No. 287-2017-UAML-X de 27 de junio de 2017 suscrito por la doctora Nelly Margarita Salazar, teniente de Policía de Sanidad y médico legista de la Policía Judicial de Cotopaxi en el cual señala que (a) luego de la valoración se verifica que el accionante está recibiendo tratamiento médico ambulatorio y (b) se sugiere que “*reciba atención médica en una casa de salud por el Médico Especialista para determinar su patología, toda vez que el turno para traumatología es para 25-07-2017, a las 10H00 como*

libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad.”.

⁹³ Consta en la sentencia de primera instancia. Además, el tratamiento sugerido por el Dr. Edison Yáñez los días 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2015, 05 de octubre y 15 de octubre de 2015 le recetan, principalmente, los siguientes medicamentos: diclofenaco, ibuprofeno y sulfadiazina de plata (fs. 1 a 8 del expediente de instancia).

consta en la hoja de referencia” y (ii) a fojas 13 del expediente de segunda instancia consta la historia clínica del Hospital General de Latacunga No. 1712079159 de Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez, en la cual, con fecha 5 de julio de 2017, en el numeral 1 “*estudio solicitado*” consta “*Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa de miembro inferior izquierdo*”; dentro del numeral 3 “*resumen clínico*” se indica que el referido accionante presenta disminución de la fuerza y movilidad desde hace un año con antecedente de lesión a nivel de región lumbar y como diagnóstico del paciente consta “*lumbalgia aguda*”.⁹⁴ Así también, a fojas 15 *ibídem*, consta el “*Plan de Alta*”, en el cual, dentro de las indicaciones, el médico recomienda reposo relativo y no hacer esfuerzos físicos.

- e. A fojas 23, obra la historia clínica No. 1712079159 de Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez, en la que con fecha 16 de mayo de 2018, en el numeral 2 “*antecedente*”, consta “*traumatismo por disparo de arma de fuego a nivel de fosa lumbar izquierda que deja como secuela hemiplejia izquierda*”; en el numeral 4, “*enfermedad actual*”, consta “*paciente masculino de 45 años de edad, acude en silla de ruedas para calificación de discapacidad*”; en el numeral 7, “*examen físico*”, consta “*parálisis de miembro inferior izquierdo*”; y, en el numeral 10, “*evolución*” se señala “*total de 71% de discapacidad física. Se ingresa al sistema y se otorga carnet*”. Certificado que obra a fojas 24 *ibídem*.

117.La Corte Constitucional, al desarrollar el contenido del derecho a la salud ha determinado⁹⁵ que este tiene cuatro elementos esenciales e interrelacionados: (i) disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) aceptabilidad y (iv) calidad. En lo venidero, se analizará el cumplimiento de estos elementos a la luz de los hechos descritos:

(i) *Disponibilidad*

118.La disponibilidad se refiere a que el Estado, para garantizar el derecho a la salud, debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas, personal médico y profesionales capacitados⁹⁶.

119.La Corte Constitucional ha señalado que las autoridades competentes “*tienen la obligación de que los establecimientos, bienes y servicios de salud estén disponibles y al alcance de las personas privadas de la libertad de los distintos centros de privación de la libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, garantizando un tratamiento médico adecuado que incluye, entre otras cosas, personal*

⁹⁴ Se trata de un dolor localizado en la parte baja de la espalda que se origina a nivel de la columna vertebral, los músculos, ligamentos o nervios de la zona.
<https://www.sergas.es/cas/documentaciontecnica/docs/consejossalud2/lumbago.htm>

⁹⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 328-19-EP/20 de 24 de junio de 2020, párr. 48-66.

⁹⁶ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general N° 14 disfrute del más alto nivel posible de salud (Art. 12), párr. 12.

*médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua potable así como condiciones sanitarias adecuadas*⁹⁷.

- 120.** Sin embargo, esta Corte debe resaltar que el elemento de la disponibilidad no se limita a que los usuarios puedan obtener el servicio de salud como tal, sino que este sea otorgado de forma oportuna y apropiada.
- 121.** Primero, como ya quedó establecido, después del amotinamiento y disparo el accionante fue atendido en el centro de privación de la libertad y recibió tratamiento ambulatorio consistente en “*realizar curaciones*” y a “*la prescripción de antibióticos y analgésicos*” (fs. 8). No obstante, luego de ello (23 de septiembre de 2015), no volvió a recibir atención médica alguna por un lapso de dos años hasta la resolución de la acción de hábeas corpus en primera instancia, es decir, hasta mediados del año 2017.
- 122.** Segundo, del expediente constitucional se evidencia que con la resolución del recurso de apelación, por primera vez recibió atención en una casa de salud y, después de realizados los estudios médicos, se lo diagnosticó al paciente con lumbalgia aguda⁹⁸.
- 123.** Tercero, de forma tardía en el año 2019 -cuatro años después del disparo-, en el marco del seguimiento de cumplimiento de la sentencia, recién se activó un plan integral de salud a cargo del MSP, consistente en rehabilitación física, atención psicológica y atención médica especializada. Sin perjuicio de esto, es evidente que la disponibilidad de las acciones orientadas a salvaguardar su salud no fue garantizada de forma oportuna y apropiada puesto que el accionante tenía la necesidad urgente de un tratamiento desde que sufrió el disparo en el año 2015. Cabe subrayar que, el seguimiento del estado de salud del accionante pasó a ser competencia del MSP debido a que se ordenó medidas alternativas a la privación de la libertad, lo que implicó que el accionante salió del CRSC.
- 124.** De los recaudos presentados, se constata lo siguiente: (i) el 05 de julio de 2017 se le realiza un primer diagnóstico de lumbalgia aguda, (ii) en el año 2018 el accionante perdió la movilidad, de manera definitiva, de sus miembros inferiores, (iii) a partir del 27 de agosto de 2019 se proporcionó un plan integral de atención médica integral y (iv) que las atenciones médicas realizadas hasta antes del año 2019, tuvieron como énfasis un tratamiento superficial de la herida.
- 125.** Por las consideraciones expuestas, esta Corte Constitucional concluye que el CRSC y el Ministerio de Salud Pública, vulneraron el derecho a la salud en su elemento de disponibilidad oportuna producto del retraso injustificado de la atención médica.

(ii) Accesibilidad

⁹⁷ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 209-15-JH/19 de 12 de noviembre de 2012, párr. 37.

⁹⁸ La Clínica Universidad de Navarra describe a la lumbalgia aguda como “*la presencia de dolor en la región comprendida entre la porción inferior de la última costilla y la región glútea puede irradiarse a una o ambas extremidades inferiores*”.

126.El elemento de accesibilidad comprende la obligación de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. La accesibilidad, según el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, presenta cuatro dimensiones superpuestas siendo estas: **(i)** No discriminación.- los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser accesibles de hecho y de derecho a todas las personas, incluyendo a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad; **(ii)** Accesibilidad física.- los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial de los grupos vulnerables o marginados, es decir, la obligación por parte del Estado de acercar los medios necesarios para la realización de los derechos; **(iii)** Accesibilidad económica (asequibilidad).- los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos; y **(iv)** Acceso a la información.- comprende solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con su salud⁹⁹.

127.En relación con la accesibilidad en establecimientos de privación de la libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (**CIDH**) ha resaltado la obligación del Estado de garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en estos lugares¹⁰⁰.

128.En el caso sujeto a análisis, considerando que dentro del CRSC no contaban con los equipos y personal para tratar el avance de su cuadro médico correspondía a este centro de privación de la libertad coordinar con el MSP las actuaciones necesarias a fin de brindar un plan de atención integral para salvaguardar la salud del accionante. No obstante, de los hechos del caso se observa que desde el año 2015 no existió coordinación por parte del CRSC y el organismo rector del sistema de rehabilitación social con el sistema nacional de salud pública.

129.Por lo que, este Organismo verifica que se ha vulnerado el derecho a la salud del accionante en su elemento de accesibilidad¹⁰¹.

(iii) Aceptabilidad

⁹⁹ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general N° 14 disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), párr. 12.

¹⁰⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, principio X.

¹⁰¹ Esta Corte toma nota que con posterioridad al inicio del seguimiento de medidas por parte del Tribunal de Garantías Penales recién se coordinó la activación de un plan integral orientado a tratar al accionante. En específico, se verifica que a partir del año 2020 el accionante tiene acceso a atención médica especializada, a pesar de no haber podido acudir al Hospital Eugenio Espejo debido a la crisis de salud a partir del COVID-19. Por otra parte, accedió y recibió rehabilitación física y atención psicológica, pero debido a la cuarentena impuesta a nivel nacional el personal sanitario de la coordinación de Salud No. 9.

130.La aceptabilidad comprende el deber de que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas. Las minorías, los pueblos y las comunidades, sensibles con los requisitos de género y el ciclo de la vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate¹⁰².

131.De la información reseñada, esta Corte verifica que la atención médica recibida puede ser considerada como aceptable debido a que no se evidencia que no se haya considerado las circunstancias particulares del accionante y tampoco que se haya irrespetado la ética médica o el consentimiento informado. En consecuencia, no se observa vulneración al elemento de aceptabilidad.

(iv) *Calidad*

132.El elemento de calidad se orienta a que la atención de salud debe ser apropiada desde el punto de vista científico y médico, así como también ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas¹⁰³.

133.A juicio de este Organismo, el accionante no recibió una atención de calidad dentro del CRSC, pues como ya quedó establecido, se le dio únicamente tratamiento ambulatorio y frente a su deterioro nunca se le brindó la atención médica oportuna y adecuada requerida para tratar su dolencia, a tal punto que después se le generó una discapacidad física. Por ello además, el accionante sufre de graves dolores e incluso incapacidad para movilizarse.

134.Bajo estas consideraciones, esta Corte ha sostenido que “[e]l obstaculizar o impedir la accesibilidad de personas privadas de libertad con enfermedades crónicas o catastróficas a los correspondientes tratamientos médicos, no solo constituiría una afectación directa a los derechos a la salud y la vida, sino que podría devenir en formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.”¹⁰⁴.

135.Por último, esta Corte no desconoce los esfuerzos del MSP en la actualidad para tratar la salud del accionante, pero reitera que estos fueron tardíos y requirieron de varios impulsos y reclamos de parte de la defensa del accionante en diversas instancias para hacerse efectivos, debiendo incluso activar la vía judicial.

¹⁰² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general N°. 14 disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), párr. 12.

¹⁰³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general N° 14 disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), párr. 12.

¹⁰⁴ Corte Constitucional. Sentencia No. 365-18-JH/21 y acumulados, párr. 102

136.De modo que esta Corte concluye que el CRSC ha vulnerado el derecho a la salud en los elementos de accesibilidad, calidad y disponibilidad.

5.2.4. Sobre el derecho a una vida digna

137.El derecho a la salud está estrechamente relacionado con el derecho a una vida digna. En la sentencia del caso Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay la Corte IDH, resaltó lo siguiente: *“Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria”*¹⁰⁵.

138.Tal como ha establecido la Corte IDH, la adopción de medidas positivas y concretas para la satisfacción de este derecho toman aún más relevancia si se trata de personas en situación de vulnerabilidad, como sucede precisamente en el caso en análisis. Al tratarse de una persona privada de libertad con una condición grave de salud provocada durante el cumplimiento de su medida cautelar de prisión preventiva, su atención médica y asistencial se vuelve prioritaria.

139.En este caso, se ha podido comprobar que la situación del accionante se agravó progresivamente hasta devengar en una discapacidad física que ahora le impide movilizarse. Así las cosas, es evidente que el CRSC, al no generar las condiciones necesarias y oportunas para que el accionante pudiera obtener acceso a la salud también ha afectado el derecho a una vida digna.

5.3. Sobre la Reparación integral

140.La CRE, en su artículo 86 (3) establece que, de existir una violación de derechos constitucionales, reconocida por un juez o jueza, procederá la reparación integral:

“La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse”.

141.Por su parte, la LOGJCC desarrolla el derecho a la reparación integral, en su artículo 18:

“En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada

¹⁰⁵ Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. 2005, párr. 162.

posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud”.

142. Para el efecto, la Corte Constitucional dividirá la reparación en dos partes: En primer lugar, emitirá medidas de la reparación respecto a la acción extraordinaria de protección sobre los derechos al debido proceso en la garantía de motivación y al plazo razonable vulnerados por el Tribunal de Garantías Penales, en la sentencia de 20 de junio de 2017, y a la motivación por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, en la sentencia de 31 de julio de 2017.

(i) Medidas de restitución

143. Aceptar la acción de hábeas corpus y declarar que el cumplimiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva del accionante en el Pabellón de Máxima seguridad fue ilegal y arbitraria.

144. Dejar sin efecto las sentencias dictadas el 20 de junio de 2017 por el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y de 31 de julio de 2017 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Cotopaxi.

145. Emitir esta sentencia sobre el mérito de los hechos que motivaron la presentación de la acción de protección, en sustitución de la sentencia dejada sin efecto.

146. Declarar que esta sentencia constituye, en sí misma una medida de satisfacción para el señor Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez.

(ii) Medidas de satisfacción respecto de los jueces que conocieron la acción de hábeas corpus:

- a.** El Consejo de la Judicatura, deberá publicar la presente sentencia durante un plazo de 3 meses consecutivos en la parte principal de su página web principal institucional y difundirla, por una sola vez, por los medios adecuados y disponibles a todos los operadores de justicia. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, los responsables del departamento de tecnología y comunicación del Consejo de la Judicatura deberán remitir a esta Corte: (i) dentro del término de 10 días contados desde el cumplimiento del plazo de 3 meses, un informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log) respecto de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente las entidades obligadas publicaron de manera ininterrumpida en su sitio web la presente sentencia.

147. En segundo lugar, producto del análisis de mérito realizado, esta Corte Constitucional efectuará la reparación de los derechos a la libertad, integridad personal y salud del señor Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez. No obstante, para el efecto, es preciso considerar que la pretensión del hábeas corpus ya fue satisfecha, pero en razón de las medidas alternativas dispuestas por el juez de garantías penitenciarias. Por esta razón la Corte establecerá medidas de reparación únicamente en relación con la afectación causada a sus derechos por la falta de tratamiento oportuno y por los 3 años que debió esperar para obtener un tratamiento integral a su salud dentro del centro de rehabilitación. Para ello, adoptará medidas de satisfacción y de no repetición al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y al Ministerio de Salud Pública.

(iii) Medidas de satisfacción ordenadas al SNAI

148. Presentar disculpas públicas al accionante y su familia por la privación de la libertad ilegal y arbitraria, el grave atentado a su integridad física y la desatención de su cuadro médico que tuvo como consecuencia ulterior que pierda la movilidad de sus piernas y una discapacidad física del 71%. Para esto, en el término de dos meses desde notificada esta sentencia, el SNAI, emitirá un comunicado dirigido y notificado directamente en su domicilio, mismo que también deberá ser publicado en la parte principal de su página web institucional por el plazo de dos meses consecutivos. En la publicación debe constar el siguiente texto:

“Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 2622-17-EP/21, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores presenta disculpas públicas al señor Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez y a su familia, pues reconoce que la privación de la libertad del accionante fue ilegal debido a que fue enviado a un Pabellón de Máxima Seguridad. Además, dado que en el marco de su privación de la libertad fue víctima de disparos en su espalda por parte de agentes penitenciarios y que producto de ello adquirió un cuadro de lumbalgia aguda, que por no haber sido tratada oportunamente generó una discapacidad física del 71%, lo cual conllevó a una vulneración a su derecho a la salud. Esta entidad reconoce su obligación de respetar la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales en relación con los derechos de las personas privadas de la libertad, más aún cuando se trata de personas que requieren de atención prioritaria que garantice sus derechos, a cuentas de que el Estado es el garante de sus derechos”.

149. Como medida de reparación económica, dado que se busca eliminar dilaciones desproporcionadas y cargas judiciales adicionales a la víctima¹⁰⁶, la Corte estima necesario ordenar que se cancele la cantidad de \$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) por los daños producidos y la vulnerabilidad a la que se enfrentó por haber sido privado de la libertad en un pabellón de máxima seguridad mientras cumplía prisión preventiva y por la afectación a sus derechos a la integridad física y salud derivadas de la falta de atención médica por un periodo superior a dos años. Dicha suma le será

¹⁰⁶ Ver Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No 904-12-JP/19 y No 335-13-JP/20.

depositada en la cuenta que el accionante designe en el plazo máximo de seis meses y el respaldo del depósito deberá ser inmediatamente remitido a esta Corte.

(iv) Medida de rehabilitación ordenada al MSP

- 150.**Garantizar, de forma oportuna, todo tratamiento y atención médica que requiera el señor Imbaquingo Sánchez, esto incluye también la continuidad de las visitas en su domicilio; así como el seguimiento telemático y telefónico de su tratamiento. De igual manera, se dispone atención psicológica para el accionante si voluntariamente acepta tenerla.

(v) Como garantía de satisfacción ordenadas al SNAI

- 151.**Por un plazo de 3 meses desde la notificación de esta sentencia, publicar la presente sentencia en la parte principal de su página web institucional y difundir su contenido, por una sola vez, entre todo el personal del SNAI. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, los responsables del departamento de tecnología y comunicación deberán remitir a esta Corte, dentro del término de 10 días contados desde el cumplimiento del plazo, un informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log) respecto de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente las entidades obligadas publicaron de manera ininterrumpida en su sitio web la presente sentencia.
- 152.**Realizar una capacitación a todos los y las servidoras públicas del SNAI, sobre los derechos de las personas privadas de libertad que presentan patologías complejas, más aún cuando estas personas tengan algún tipo de discapacidad, a fin de que se asegure una atención de calidad a estas personas. Esta capacitación debe tener como eje el enfoque de derechos humanos y la sensibilización con la realidad de cada una de las personas. Además, se deberá realizar otra capacitación a todos los y las servidoras públicas del SNAI sobre el uso progresivo y racional de la fuerza a la luz de la jurisprudencia expedida por la Corte Constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos¹⁰⁷. Para estas capacitaciones deberá coordinar acciones con la Defensoría del Pueblo. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, el responsable del SNAI deberá remitir a esta Corte el cumplimiento de esta medida en un tiempo máximo de 6 meses desde la notificación de esta sentencia.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Aceptar la acción extraordinaria de protección.

¹⁰⁷ Por ejemplo, las sentencias No. 33-20-IN/21 y acumulados y No. 365-18-JH/21 y acumulados expedidas por la Corte Constitucional del Ecuador.

2. Declarar que la sentencia dictada el 30 de junio de 2017 por el Tribunal de Garantías Penales vulneró los derechos constitucionales al plazo razonable (art. 8 CADH) y al debido proceso en la garantía de motivación (art. 76.7. 1 CRE) y que la sentencia dictada el 31 de julio de 2017 por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia Cotopaxi vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación (art. 76. 7. 1 CRE).
3. Aceptar la acción de hábeas corpus y declarar que el cumplimiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva del accionante en el Pabellón de Máxima seguridad fue ilegal y arbitraria.
4. Declarar que la falta de atención médica y omisión de respetar el principio de vida libre de violencia en el CRSC vulneró los derechos a la integridad personal (art. 66.3 CRE), a la salud (art. 32 CRE) y a la vida digna (art. 66. 2 CRE).
5. Como medidas de reparación integral se dispone:

5.1. Medidas de restitución:

- a. Dejar sin efecto las sentencias dictadas el 20 de junio de 2017 por el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y de 31 de julio de 2017 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Cotopaxi.
- b. Emitir esta sentencia sobre el mérito de los hechos que motivaron la presentación de la acción de hábeas corpus, en sustitución de la sentencia dejada sin efecto en el numeral 5.
- c. Declarar que esta sentencia constituye, en sí misma una medida de satisfacción para el señor Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez.

5.2. Medidas de satisfacción respecto de los jueces que conocieron la acción de hábeas corpus:

- a. El Consejo de la Judicatura, deberá publicar la presente sentencia durante un plazo de 3 meses consecutivos en la parte principal de su página web principal institucional y difundirla, por una sola vez, por los medios adecuados y disponibles a todos los operadores de justicia. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, los responsables del departamento de tecnología y comunicación del Consejo de la Judicatura deberán remitir a esta Corte: (i) dentro del término de 10 días contados desde el cumplimiento del plazo de 3 meses, un informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log) respecto de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente las entidades obligadas publicaron de manera ininterrumpida en su sitio web la presente sentencia.

5.3. Como medidas de satisfacción el SNAI como organismo rector del sistema de rehabilitación social deberá:

- a. Presentar disculpas públicas al accionante y su familia por la privación de la libertad ilegal y arbitraria, el grave atentado a su integridad física y la desatención de su cuadro médico que tuvo como consecuencia ulterior que pierda la movilidad de sus piernas y se genere una discapacidad física del 71%. Para esto, en el término de dos meses desde notificada esta sentencia, el SNAI, emitirá un comunicado dirigido y notificado directamente en su domicilio. Mismo que también deberá ser publicado en la parte principal de su página web institucional por el plazo de dos meses consecutivos. En la publicación debe constar el siguiente texto:

“Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 2622-17-EP/21, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores presenta disculpas públicas al señor Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez y a su familia, pues reconoce que la privación de la libertad del accionante fue ilegal debido a que fue enviado a un Pabellón de Máxima Seguridad. Además, dado que en el marco de su privación de la libertad fue víctima de disparos en su espalda por parte de agentes penitenciarios y que producto de ello adquirió un cuadro de lumbalgia aguda, que por no haber sido tratada oportunamente generó una discapacidad física del 71%, lo cual conllevó a una vulneración a su derecho a la salud. Esta entidad reconoce su obligación de respetar la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales en relación con los derechos de las personas privadas de la libertad, más aún cuando se trata de personas que requieren de atención prioritaria que garantice sus derechos, a cuentas de que el Estado es el garante de sus derechos”.

Para justificar el cumplimiento integral de la medida, el SNAI deberá remitir a esta Corte: (i) dentro del plazo de 3 meses desde la notificación de la sentencia, un informe con los correspondientes respaldos respecto de la entrega de la disculpa pública, así como el detalle del registro de actividades (historial log) respecto de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente se publicó de manera ininterrumpida en su sitio web.

- b. Cancelar en equidad un total de \$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) por los daños producidos y la vulnerabilidad a la que se enfrentó por haber sido privado de la libertad en un pabellón de máxima seguridad mientras cumplía prisión preventiva y por la afectación a sus derechos a la integridad física y salud derivadas de la falta de atención médica por un periodo superior a dos años. Dicha suma le será depositada en la cuenta que el accionante designe en el plazo máximo de seis meses y el respaldo del depósito deberá ser inmediatamente remitido a esta Corte.

5.4. Como medidas de rehabilitación el MSP deberá:

- a.* Garantizar, de forma oportuna, todo tratamiento y atención médica que requiera el señor Imbaquingo Sánchez, esto incluye también la continuidad de las visitas en su domicilio; así como el seguimiento telemático y telefónico de su tratamiento. De igual manera, se dispone atención psicológica para el accionante si voluntariamente acepta tenerla.

Para efectos del cumplimiento de esta medida, el MSP deberá remitir a este Organismo un informe detallado de la atención médica brindada en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de esta sentencia.

5.5. Como garantía de satisfacción el SNAI deberá:

- a.* Por un plazo de 3 meses desde la notificación de esta sentencia, publicar la presente sentencia en la parte principal de su página web institucional y difundir su contenido, por una sola vez, entre todo el personal del SNAI. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, los responsables del departamento de tecnología y comunicación deberán remitir a esta Corte, dentro del término de 10 días contados desde el cumplimiento del plazo, un informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log) respecto de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente las entidades obligadas publicaron de manera ininterrumpida en su sitio web la presente sentencia.
- b.* Realizar una capacitación a todos los y las servidoras públicas del SNAI, sobre los derechos de las personas privadas de libertad que presentan patologías complejas, más aún cuando estas personas tengan algún tipo de discapacidad, a fin de que se asegure una atención de calidad a estas personas. Esta capacitación debe tener como eje el enfoque de derechos humanos y la sensibilización con la realidad de cada una de las personas. Además, se deberá realizar otra capacitación a todos los y las servidoras públicas del SNAI sobre el uso progresivo y racional de la fuerza a la luz de la jurisprudencia expedida por la Corte Constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Para estas capacitaciones deberá coordinar acciones con la Defensoría del Pueblo. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, el responsable del SNAI deberá remitir a esta Corte el cumplimiento de esta medida en un tiempo máximo de 6 meses desde la notificación de esta sentencia.

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase

Dr. Hernán Salgado Pesantes
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes (voto concurrente); y, un voto en contra de la Jueza Constitucional Teresa Nuques Martínez; en sesión ordinaria de miércoles 10 de noviembre de 2021.- Lo certifico.

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL

SENTENCIA No. 2622-17-EP/21

VOTO CONCURRENTE

Juez Constitucional Hernán Salgado Pesantes

Por encontrarme de acuerdo con la decisión, pero para realizar algunas puntualizaciones adicionales, me permito emitir el presente voto concurrente dentro de la sentencia 2622-17-EP/21.

Antecedentes.-

1. La sentencia 2622-17-EP/21 conoció la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Jorge Aníbal Imbaquingo Sánchez, en contra de las sentencias de primera y segunda instancia emitidas en la acción de hábeas corpus que en su momento fue planteada por el accionante.
2. En la sentencia se aceptó la acción considerar que las decisiones vulneraron los derechos del legitimado activo. Además, se realizó un control de mérito y se aceptó la acción de hábeas corpus por encontrar que la prisión preventiva impuesta al accionante fue ilegal y arbitraria, así como también porque se vulneraron sus derechos a la integridad personal, a la salud y a la vida digna.
3. Expuesto aquello, reitero que me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada por el Pleno de la Corte Constitucional; no obstante, considero que se debió analizar un aspecto adicional dentro de las consideraciones realizadas en la garantía de motivación, lo que paso a desarrollar a continuación.

Análisis.-

4. En la Sentencia 2622-17-EP/21 se analizó la garantía de motivación en las sentencias de 30 de junio de 2017 y de 31 de julio de 2017 emitidas dentro de la acción de hábeas corpus planteada en su momento por el compareciente.
5. En cuanto a la sentencia de apelación, se concluyó que “...la judicatura accionada dejó sin resolver los cargos referentes a una posible privación de la libertad ilegal y arbitraria producto de la privación de la libertad en el pabellón de máxima seguridad mientras cumplía una prisión preventiva y a la afectación a la integridad física...”.
6. Para concluir que se dejaron de resolver los cargos antes mencionados, la Corte Constitucional determinó que los mismos fueron expuestos en la audiencia de

apelación¹, particularmente, aquel relacionado con la configuración de una supuesta privación de libertad ilegal y arbitraria, por haber enviado al accionante a un pabellón de máxima seguridad.

7. En efecto, sobre este aspecto, la Sala de la Corte Provincial que conoció el recurso de apelación, indicó: “6.5. *Respecto de la alegación de que al accionante el 1 de septiembre le trasladan al pabellón c1c de máxima seguridad cuando aún no tenía sentencia, la Sala observa que esta alegación se presenta en la audiencia pero no consta en el escrito de acción*”² (Énfasis añadido).
8. Frente a lo anterior, surge el cuestionamiento de si existía la obligación de la Corte Provincial de pronunciarse respecto de un cargo que fue expuesto por primera ocasión en audiencia y no en su demanda de hábeas corpus.
9. Al respecto, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) establece como uno de los requisitos de la demanda en esta materia, la “*descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño*”. En este contexto, la determinación de la relación circunstancia de los hechos recae en la parte accionante y el momento procesal es en la demanda.
10. Ahora bien, ¿qué ocurre si existe algún acto u omisión que no consta en la demanda pero que, en el transcurso del proceso el accionante, lo presenta y pretende que se lo analice?
11. En principio, existiría la posibilidad de que el accionante presente nuevos hechos en su demanda. Sin embargo, considero que deben corresponder a sucesos sobrevinientes y que tengan relación con el objeto de la acción que se está resolviendo. En el caso de la acción de hábeas corpus, por ejemplo, podrían tratarse de nuevos actos u omisiones relacionadas con la situación o las condiciones de privación de libertad.
12. En este tipo de circunstancias, el accionante se encontraría en la posibilidad de incorporarlos al proceso o señalarlos para que sean considerados por los jueces y juezas, siempre y cuando procesalmente exista un momento para su contradicción y así la contraparte pueda ejercer el derecho a la defensa, así como también si se justifica que son hechos sobrevinientes y relevantes para la causa.

¹ En el párrafo 57 de la Sentencia No. 2622-17-EP/21 se indica: “57. *A fin de verificar si la decisión analizada contiene la motivación mínima, que incluye pronunciarse sobre los argumentos relevantes, se debe considerar que el accionante presentó los siguientes cargos en su demanda de hábeas corpus y en la audiencia de apelación: (i) violación del derecho a la integridad física por lo ocurrido durante el motín, (ii) configuración de una privación de la libertad ilegal y arbitraria por haberse privado al accionante en un pabellón de máxima seguridad y (iii) falta de atención médica, por más de dos años, como violatoria al derecho a la salud*” (Énfasis añadido).

² Acción de hábeas corpus No. 05241-2017-00003. Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Sentencia de 31 de julio de 2017.

13. Ahora bien, distinto podría ser el escenario si las circunstancias no son nuevas y sí habrían podido ser alegadas e incluidas en la demanda. En dicho evento, el accionante no habría cumplido a cabalidad su carga de presentar la demanda con un adecuado relato de la relación circunstanciada de los hechos que serán objeto del litigio, lo cual, inclusive, podría provocar efectos nocivos hacia el ejercicio del derecho a la defensa de la contraparte.
14. En este sentido, la incorporación de hechos que no son nuevos y que, por omisión del accionante, no fueron señalados en la demanda, podría generar dificultades procesales. Esto se debe a que si bien podrían tratarse de actos u omisiones relevantes, se reformaría la demanda y, por el diseño procesal de las garantías jurisdiccionales, se impediría a la parte accionada defenderse o presentar los argumentos y pruebas que consideren necesarios en virtud de lo expuesto en la demanda.
15. Tal apreciación, sin embargo, no podría ser absoluta tratándose de acciones constitucionales y requiere más reflexiones al respecto, dado que existe la posibilidad de que los hechos no alegados en la demanda sean imprescindibles para tutelar derechos ante situaciones de afectaciones graves de derechos constitucionales. No obstante, a mi juicio, aquello debe ser excepcional, siempre que concurren requisitos como los siguientes: i) Que la parte accionante justifique las razones por las que no fueron incluidos estos hechos en la demanda; ii) Que la parte accionante acredite la relevancia de los hechos para la resolución del caso concreto; iii) Que el juzgador motive por qué razón, excepcionalmente, se incluirían en el proceso circunstancias no alegadas oportunamente; y, iv) Que exista la posibilidad de contradicción y que no se limite el derecho a la defensa de la contraparte.
16. Considero que en la sentencia de mayoría se debió plantear esta discusión y analizar aspectos como los esbozados en el párrafo anterior, que no buscan ser criterios absolutos sino más bien parámetros que actúen como un punto de partida para abordar esta temática tan relevante en un proceso jurisdiccional.
17. En el presente caso, el argumento de la privación de libertad en el pabellón de máxima seguridad se presentó en la audiencia de apelación. En consecuencia, considero que este punto sí pudo ser señalado por el accionante en su demanda debido a que la privación de libertad en dicho pabellón fue anterior al motín en el cual resultó afectado. Sin embargo, fue presentado de forma posterior, lo que, a mi criterio, se constituyó en una reforma a su demanda de hábeas corpus. Por lo tanto, estimo que no existía la obligación de la Corte Provincial de pronunciarse al respecto en su sentencia.
18. En virtud de lo expuesto, considero que este aspecto de índole procesal, debía desarrollarse de forma más detenida y detallada en la sentencia, toda vez que tiene relación con la vulneración a la garantía de motivación analizada y el consecuente análisis de mérito. Incluso, una vez que la Corte entró a estudiar la acción de hábeas corpus, este fue un cargo sobre el cual se pronunció y concluyó que existió una

privación ilegal y arbitraria por haber privado de libertad al accionante en el pabellón de máxima seguridad cuando se le impuso prisión preventiva.

Dr. Hernán Salgado Pesantes
JUEZ CONSTITUCIONAL

Razón.- Siento por tal que el voto concurrente del Juez Constitucional Hernán Salgado Pesantes, en la causa 2622-17-EP, fue presentado en Secretaría General, el 24 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico a las 13:32; y, ha sido procesado conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL